

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Vobis etiam merito accepta referimus, qui tam strenue religionis et justitiae partes tuendas suscepistis....

DIARIO CATÓLICO, APOSTÓLICO, ROMANO.

Deumque, cuius causam agitis, rogamus ut vos in proposito confirmet.—
Pío IX, al director y redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Madrid: 12 rs. al mes.—En Provincias 17 rs. al mes y 50 por trimestre en casa de los comisionados, y 15 rs. al mes y 42 el trimestre en la administración.—En el Extranjero: 70 rs. trimestre.—En Ultramar: 90 reales trimestre.—La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRICION.—Madrid: En la administración, calle de Pelayo, números 38 y 40, cuarto principal de la derecha.—Provincias: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.—Paris: Agencia franco-española de D. C. A. Saaavedra, 53, Rue Taibout.—Manila: D. Fracisco Zudaire, Presbitero.—No se devuelve ningún manuscrito.

PARTE OFICIAL DE LA GACETA

DECRETO SOBRE EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO UNIVERSAL.

CAPITULO PRIMERO.

De los electores, de los elegibles y de las incompatibilidades.

Artículo 1.º Son electores todos los españoles mayores de 25 años inscritos en el padrón de vecindad, que se formará conforme a los artículos 15, 16 y 17 de la ley municipal, y se rectificará anualmente poniendo al público por 15 días un cuadro demostrativo de las altas y bajas ocurridas durante el año en el censo electoral.

Art. 2.º Exceptuándose únicamente:
1.º Los que por sentencia ejecutoriada se hallen privados del ejercicio de derechos políticos.

2.º Los que al verificarse las elecciones se hallen procesados criminalmente, si se hubiere dictado contra ellos auto de prisión.

3.º Los sentenciados a penas aflictivas y correccionales, mientras no hayan extinguido sus condenas y obtenido rehabilitación, en los casos que esta proceda con arreglo a las leyes.

4.º Los incapacitados que como tales estén sujetos a curaduría ejemplar.

5.º Los fallidos o en suspensión de pagos.

6.º Los deudores a los fondos públicos, apremiados en concepto de segundos contribuyentes.

Art. 3.º El derecho electoral, y su ejercicio por sufragio universal, se extiende a las elecciones municipales, provinciales y de Cortes.

Art. 4.º Para acreditar este derecho, se entregará por el alcalde a cada elector una cédula de vecindad, talonaria, arreglada al modelo número primero.

Art. 5.º Las cédulas de que habla el artículo anterior se darán a todos los vecinos electores, sirviendo para clasificarlos así el padrón que los ayuntamientos deben formar, y las declaraciones de vecindad que, de oficio o a solicitud del interesado, verifiquen con posterioridad en la forma que dispone la ley de ayuntamientos en sus artículos 9.º, 10, 11 y 12.

Art. 6.º Las exclusiones enumeradas en el artículo 2.º se justificarán llevando un registro por orden alfabético, expresivo de los vecinos que se hallen comprendidos en ellas; y en la cédula de vecindad se anotará la privación del derecho electoral.

Art. 7.º Todo elector tiene derecho a que durante el año se le pongan de manifiesto en la secretaría del ayuntamiento el padrón y registro electoral, y a que se le admitan pruebas contra la capacidad de los demás electores, pudiendo alzarse de las providencias que recaigan sobre sus reclamaciones ante la diputación provincial.

Los curas párrocos tendrán obligación de expedir gratis y en papel de oficio a todo elector que la necesite para acreditar su derecho, su partida de bautismo, expresando el objeto para que se expide. Estas partidas no serán admitidas en ningún tribunal ni oficina sino para acreditar el derecho electoral o la carencia del mismo, y los que las usen con otro fin serán castigados como defraudadores de la renta del papel sellado.

Art. 8.º Los Juzgados remitirán al alcalde nota certificada de los que se hallen comprendidos en alguno de los cinco primeros casos de exclusión.

En lo sucesivo, cuando en una sentencia ejecutoria se prive o suspenda del derecho electoral a un ciudadano, el juzgado pasará testimonio en relación de ella al alcalde del pueblo de la vecindad de aquel.

Para la exclusión de los comprendidos en el caso 6.º, se atenderán los ayuntamientos a los datos que existan en sus secretarías.

Art. 9.º La entrega de cédulas se verificará precisamente en el mes de Enero de cada año, bajo la responsabilidad del alcalde, en el domicilio de cada elector.

El vecino elector a quien sin razón se negare la entrega de la cédula, podrá entablar contra el alcalde ante el juzgado de primera instancia la acción criminal que le compete, conforme a las disposiciones penales de esta ley.

Cuando un elector haya cambiado de domicilio, después de empadronado y de haber recibido la cédula electoral, votará precisamente en el colegio a que pertenecía cuando se le declaró el derecho, y no en el de su nuevo domicilio.

Art. 10. Los electores pertenecientes al ejército y armada en servicio activo, votarán en el punto donde se encuentren en el día de la elección, siempre que lleven en él dos meses al menos de residencia continuada.

Los militares en servicio activo, así como los marinos, solo podrán tomar parte en las elecciones de Cortes.

Cuando una población se halle dividida en dos o más circunscripciones electorales, los jefes superiores de las fuerzas militares y marítimas en activo servicio dividirán bajo su responsabilidad los electores que a ellas pertenezcan por iguales partes entre las circunscripciones a fin de que nunca voten diez más en una que en otra.

Art. 11. Para acreditar el derecho electoral los individuos pertenecientes al ejército y armada, en servicio activo, serán provistos por el jefe del cuerpo a que correspondan de una cédula de filiación talonaria.

Ocho días antes de la elección pasarán los jefes de los cuerpos del ejército y armada en servicio activo al alcalde del pueblo en que los mismos residan, una relación numerada y por orden alfabético de los individuos que estén a sus órdenes y a quienes por tener derecho electoral se haya provisto de cédula; y una nota expresiva de su división entre las secciones, conforme al párrafo tercero del art. 10.

Art. 12. Son elegibles para concejales todos los vecinos que no estén comprendidos en alguna de las excepciones del art. 2.º y tengan su residencia y casa abierta en la localidad.

Para diputados provinciales son elegibles los vecinos de cada provincia que se encuentren en el mismo caso expresado en el párrafo anterior, y no desempeñen destino retribuido con fondos de la provincia o del Estado.

Los militares y marinos en servicio activo solo son elegibles para diputados a Cortes.

Art. 13. Para los cargos de concejal y de diputado provincial o a Cortes, no podrán ser elegidos los que desempeñen cargo o comisión de nombramiento del Gobierno, con ejercicio de autoridad en la provincia, distrito o localidad en que lo ejerzan.

Los empleados de nombramiento del gobierno que ejerzan su cargo en Madrid podrán ser elegidos diputados a Cortes por la provincia, siempre

que aquel no lleve afecto el ejercicio de jurisdicción o mando, o tenga limitadas sus atribuciones a la provincia misma.

Art. 14. El ejercicio de cargo de diputado a Cortes es incompatible con todo destino público, civil, militar o marítimo que exija residencia fuera de Madrid.

Art. 15. Cuando los electos diputados que se hallen en el caso del artículo anterior presenten su acta en la secretaría de las Cortes, se entenderá que renuncian al destino público que desempeñaban.

Art. 16. Si no la presentaren antes del día de la constitución definitiva de la Asamblea, se entenderá que renuncian al cargo de diputado.

Art. 17. El diputado que fuere elegido por dos o más provincias o circunscripciones, optará, en término de ocho días, a contar desde la constitución de la Asamblea, por la que desee representar, entendiéndose vacante su plaza en las demás que lo hayan elegido.

Art. 18. Tanto en este caso como en el de renuncia expresa o tácita del cargo, conforme al artículo 16, el presidente de las Cortes pasará al gobierno comunicación de aviso.

Art. 19. No se procederá a efectuar elección parcial, sino cuando en una provincia hubiere vacado la tercera parte de las plazas de diputados que tenga asignadas.

Art. 20. El Gobierno, dentro de ocho días, contados desde la fecha de la comunicación de las Cortes, anunciando la vacante que llegue al número marcado en el artículo anterior, publicará en la Gaceta de Madrid el decreto convocando a los colegios electorales de la circunscripción, y señalando en él los días en que ha de hacerse la elección parcial, que no podrán fijarse ni antes de los 20, ni después de los 30, contados desde la fecha de esta convocatoria.

Art. 21. La elección parcial se hará en la forma dispuesta para las elecciones generales.

CAPITULO II.

Elecciones municipales.

Art. 22. Las elecciones de ayuntamientos tendrán lugar en las épocas marcadas por la ley municipal para su renovación.

Art. 23. Los ayuntamientos designarán y anunciarán con la oportuna anticipación los colegios electorales que sean convenientes para la mayor facilidad en la emisión de los votos, no pudiendo exceder el número de los colegios del de alcaldes que correspondan al ayuntamiento en las poblaciones que no excedan de 5.000 vecinos.

En las que pasen de este número, el ayuntamiento hará la subdivisión de los distritos o colegios en tantas secciones como sean necesarias para facilitar la libre emisión del sufragio, siempre que el número de secciones no exceda del de alcaldes de barrio.

Art. 24. El número total de concejales se dividirá con exactitud por el de alcaldes; y el cociente será el número de candidatos que hayan de votar los electores de cada distrito o colegio.

Cuando resultare un residuo se sacarán a la suerte en la primera elección los distritos que hayan de elegir un concejal más; pero los distritos agraciados no estarán en suerte en las elecciones sucesivas, sino que se establecerá el turno.

Art. 25. Hecha la división, se anunciará al público por ocho días, durante los cuales se admitirán reclamaciones sobre ella, que el ayuntamiento informará en la primera sesión siguiente; y remitirá a la diputación provincial para su resolución, la cual deberá recaer antes del 15 de Octubre.

Art. 26. Si no hubiese reclamaciones en el término prefijado, se anunciará desde luego como definitiva la división del colegio; y si las hubiere, se hará el mismo anuncio tan luego como la diputación confirme su resolución sobre ellas.

Art. 27. La división del distrito en colegios, una vez hecha, será permanente y no podrá alterarse sino por justa causa, aprobada por la diputación provincial. Para la nueva división se guardarán los trámites prevenidos en el artículo anterior.

Las alteraciones que se hagan estarán aprobadas antes del día 1.º de Octubre, y no serán válidas en otro caso para la próxima elección.

Art. 28. Las elecciones ordinarias comenzarán el primer domingo del mes de Noviembre, reuniéndose los electores de cada colegio a las nueve en punto de la mañana en el sitio destinado al efecto por el alcalde, quien bajo su responsabilidad lo anunciará con ocho días de anticipación en los sitios de costumbre y en los periódicos del pueblo si los hubiere.

Art. 29. A cada colegio electoral concurrirá un alcalde, y no habiéndolo, el regidor a quien por antigüedad correspondiera; a falta de concejal asistirá el alcalde de barrio respectivo. Habrá sobre la mesa: las matrices de las cédulas de vecindad establecidas en el art. 4.º, en la parte concerniente al colegio; una lista por orden numérico de los electores del mismo, con dos casillas en blanco para estampar en ellas la palabra *voto*.

La primera de estas casillas servirá para anotar la votación de la mesa, y la segunda para la de los candidatos. Habrá también un ejemplar de esta ley y además una urna para depositar las papeletas de la votación.

Art. 30. No se admitirá a votar a persona alguna que no presente la cédula de que habla el art. 4.º.

Art. 31. En el momento de dar la hora señalada, el alcalde, concejal o alcalde de barrio que asistiere al colegio ocupará la presidencia, y declarará en nombre de la ley abierta la sesión de la junta preparatoria.

Invitará después a los dos más ancianos y a los dos más jóvenes de los electores presentes a tomar asiento en la mesa para ejercer las funciones de secretarios escrutadores interinos.

Art. 32. Si hubiere reclamación sobre la edad que declare tener los escrutadores interinos, se estará a lo que resulte de las cédulas de vecindad, que presentarán.

Art. 33. Luego que se hayan sentado los escrutadores interinos anunciará el presidente que se procede a la votación de la mesa, la cual se compondrá de un presidente y cuatro secretarios escrutadores elegidos en votación secreta por papeletas y a pluralidad de votos.

Art. 34. Cada elector podrá ya llevar manuscrita, en papel precisamente blanco, o escribirá o hará escribir por otro elector en el local de la elección la papeleta que contenga su voto.

Art. 35. La papeleta contendrá el nombre de aquel de los electores del mismo colegio o sección a quien se designe para presidente, y debajo, con distinción y expresándolo, los de otros dos electo-

res, también de la misma sección, para secretarios escrutadores.

No podrán ser elegidos para componer las mesas electorales ni ejercer en ellas cargo alguno, los electores que no sepan leer y escribir.

Art. 36. Los electores se irán acercando uno a uno sucesivamente a la mesa y exhibirán la cédula de vecindad, en la cual leerá su nombre el presidente, que se la devolverá sellada en el anverso, anotando un secretario la palabra *voto* en la casilla correspondiente de la lista numerada; y en seguida entregará la papeleta de votación al presidente, que la depositará en la urna.

Si ocurriese duda sobre la legitimidad de alguna cédula se celebrará con el fin.

Art. 37. A las tres de la tarde prohibirá el presidente, en nombre de la ley, que se permita la entrada en el local de la elección a persona alguna, cerrando las puertas si necesario fuere.

Hecha esta prohibición se acabarán de recibir los votos de los electores presentes; y luego que hubiere votado el último en concepto de la mesa, preguntará el secretario escrutador en alta voz y hasta tres veces: «¿Hay algún elector presente que no haya votado?» No habiendo quien reclame, el presidente dirá: «Queda cerrada la votación de la mesa; y desde aquel momento no se admitirá voto alguno, y se permitirá de nuevo la entrada en el local.

Art. 38. Cerrada la votación, un escrutador leerá en voz alta los nombres de los electores que hayan tomado parte, contará y declarará su número al terminar la lectura, y en seguida el presidente, abriendo la urna, comenzará el escrutinio.

Art. 39. Este se verificará estrayendo el presidente las papeletas de la urna, una a una, desdoblándolas, leyendo en alta voz y depositándolas en seguida sobre la mesa.

Cualquier elector tiene derecho de leer por sí, o pedir que se vuelvan a leer las papeletas sobre que se le ofrezca duda.

Dos secretarios escrutadores llevarán simultáneamente nota de la votación para presidentes, y otros dos de la votación para secretarios.

Art. 40. Las papeletas que ofrecieren duda sobre su validez, se dejarán aparte, siguiendo el escrutinio con las claramente valederas hasta terminar. Llegado este caso, la mesa examinará las dudosas, decidiendo por mayoría con arreglo a este decreto y bajo su responsabilidad lo que estimare justo.

Las dudas, sus resoluciones y las protestas por escrito o de palabra a que dieren lugar, se consignarán precisamente en el acta.

Art. 41. En las papeletas donde se hubiere omitido la distinción clara y terminante de presidente y secretarios, se entenderá designado para aquel cargo el primer nombre inscrito, y para los de secretarios los dos que le sigan.

En las que contuvieren más de tres nombres, se tendrán por valederos los tres primeros inscritos y por nulos todos los restantes.

Los nombres ilegibles se tendrán por nulos. En cuanto a las faltas ortográficas y leves diferencias en nombres y apellidos, la mesa decidirá, consignando en el acta los hechos, sus resoluciones y las protestas a que dieren lugar.

Art. 42. Cuando se encontraren dobladas juntamente dos o más papeletas, si fueren idénticas, se contarán como una sola; pero si hubiere entre ellas alguna diferencia esencial, se anularán todas, consignándose en el acta.

Art. 43. La mesa decidirá los casos no previstos en la ley por lo que respecta a la validez de las papeletas, consignando siempre en el acta todas sus resoluciones.

Art. 44. Terminada la lectura de las papeletas, la resolución de los casos dudosos y admitidas las protestas a que hubiere lugar, se procederá al recuento de votos después de haber preguntado el presidente por tres veces contra el escrutinio: «¿Hay protesta que hacer contra el escrutinio?»

Art. 45. Cada escrutador hará el recuento de los votos que anotó; y luego que se hubiesen enfrentado entre sí los resultados de aquellos que llevarán una misma votación y estén de acuerdo, pasarán sus notas los que anotaron votos para presidente a los que los anotaban para secretarios, y viceversa.

De acuerdo el presidente y los cuatro escrutadores interinos, se extenderá la lista de los que hubieren obtenido votos para presidente y secretarios, por orden de mayor a menor, y sin omitir ninguno.

Art. 46. Estas listas se leerán en voz alta por uno de los escrutadores, verificado lo cual, el concejal o alcalde de barrio que presida proclamará presidente del colegio electoral al elector que para este cargo hubiere obtenido mayor número de votos, y secretarios escrutadores a los cuatro que hubiesen obtenido también mayor número de sufragios.

Art. 47. Hecha la proclamación de los elegidos, se contarán públicamente las papeletas de los votos, y se quemarán acto continuo, excepto aquellas sobre las cuales haya reclamación, después de confrontar su número con el que arrojan los anotados como votantes en la lista numerada.

Art. 48. Si después de quemadas las papeletas, el presidente o alguno de los secretarios no se hallaren presentes en el local de la elección al tiempo de proclamarse, serán avisados a domicilio, y si no se presentasen en término de media hora, se entenderá que renuncian, y se tendrán por elegidos los que para el cargo respectivo hubieren obtenido la votación inmediata en número y se hallaren en el local.

Art. 49. El presidente de la junta preparatoria dará posesión de sus cargos al presidente y escrutadores elegidos, declarando constituido el colegio electoral, y retirándose si no fuera elector del mismo.

Art. 50. El presidente y secretarios escrutadores interinos redactarán y firmarán el acta de la junta preparatoria y la depositarán en la secretaría del ayuntamiento antes de las once de la mañana del día siguiente, donde podrán examinarla los electores que quisieren.

Art. 51. Constituido al día siguiente el colegio electoral a las nueve de la mañana, su presidente declarará que se empieza la votación para cargos municipales.

Art. 52. Para votar irán los electores acercándose uno a uno sucesivamente a la mesa, y entregarán al presidente la papeleta, que llevarán escrita en papel blanco, o escribirán, o harán escribir a persona de confianza en el local.

Art. 53. El presidente leerá en voz alta el nombre del votante en la cédula de vecindad, que deberá exhibir aquel, y le será devuelta después de sellada en el reverso y de anotarse por un secretario la palabra *voto* en la segunda casilla correspondiente a su nombre en la lista numerada; y en seguida depositarán en la urna la papeleta de votación a presencia del elector.

Art. 54. Las papeletas contendrán solamente los nombres de los concejales que hayan de elegirse en el distrito o colegio, conforme a la división prevenida en el art. 24.

Art. 55. A las cuatro en punto de la tarde se procederá al escrutinio como se previene en los artículos 39, 40, 41 y 42, encargándose dos secretarios de anotar separadamente los votos de cada candidato.

Art. 56. Publicado el escrutinio se contarán confrontándolos con el número de electores anotados, y se quemarán las papeletas de los votos, levantando en seguida el presidente la sesión.

Art. 57. Acto continuo, el presidente y secretarios redactarán y firmarán el acta parcial por duplicado, conforme a lo prevenido en esta ley y modelo adjunto, núm. 3.º Un ejemplar del acta lo conservará en su poder el presidente de la mesa, y el otro lo remitirá al alcalde único o primero del pueblo o distrito antes de las ocho de la mañana del día siguiente.

A cada acta se unirá lista nominal de los electores que hayan tomado parte en la votación, la cual se sacará de la nominal numerada en que se hayan ido anotando los votantes, conforme al artículo 29.

Art. 58. Antes de las nueve de la mañana del día siguiente, cuidarán bajo su responsabilidad el presidente y secretarios, de que se fijen listas a la puerta del colegio electoral con los nombres de los electores que aquel día hubiesen tenido parte en la votación, y de los que hubiesen tenido votos.

Art. 59. A las nueve de la mañana del día siguiente, se reunirá el colegio electoral sin necesidad de anuncio para continuar la votación comenzada en el día anterior.

Solo en el caso de haber votado el segundo día todos los electores del distrito inscritos en las listas, podrá omitirse la reunión del tercero.

Art. 60. Concluida la votación del tercer día, y redactada su acta parcial, se publicarán las listas de que trata el art. 58, y extenderá el acta general del colegio, resumiendo en ella los resultados de los escrutinios anteriores y todos los incidentes graves de la elección.

Con respecto al acta general se observará todo lo prevenido para la parcial en el art. 57.

Art. 61. En las poblaciones en que haya más de tres colegios electorales, y en aquellas en que los colegios estén divididos en secciones, cada mesa elegirá a pluralidad de votos, al terminar la votación del último día, un secretario escrutador que asista como comisionado al escrutinio general.

Art. 62. El escrutinio general se hará en todos los pueblos el segundo domingo del mes de Noviembre, a las diez en punto de la mañana. Donde no hubiese más que un colegio, servirá de escrutinio general el resumen de que habla el artículo anterior. Donde los colegios o distritos estén divididos en secciones con arreglo al art. 23, el escrutinio general se hará en la alcaldía del respectivo distrito, la cual se encargará de remitir el acta al alcalde primero en el mismo día en que se firme.

Art. 63. La junta, compuesta del presidente o presidentes y secretarios de los colegios electorales, bajo la presidencia del alcalde único o primero, y con la asistencia del ayuntamiento, se constituirá en las Casas Consistoriales.

Ni el alcalde ni el ayuntamiento tendrán votos como tales en este acta.

Art. 64. En los pueblos en que hubiere un solo colegio electoral, se sacará a la suerte dos de los secretarios escrutadores y dos de los individuos de ayuntamiento, que en calidad de secretarios hagan la comprobación de las actas y recuento de los votos.

Art. 65. En donde hubiere más de un colegio, se sacará a la suerte cuatro de los secretarios escrutadores para practicar el recuento y resumen general de votos.

Art. 66. La junta de escrutinio examinará todas las reclamaciones que hubiere hecho cualquier elector contra la legítima representación de algunos de los presidentes o secretarios de los colegios o contra la autenticidad o exactitud de las actas.

De estas reclamaciones, y de los motivos para apreciarlas o desestimarlas, se hará expresa mención en el acta, así como de la resolución que se adoptare y de las protestas que en contra se hicieren.

Art. 67. Serán proclamados concejales los que en cada distrito o colegio resulten con mayoría relativa de votos hasta completar el número que haya de elegirse. El empate entre los electores lo decidirá la suerte.

Art. 68. Hecho esto, se extenderá acta expresa del escrutinio, en que se hará mención de las reclamaciones, dudas y protestas que hubiere habido, autorizándola los presentes. En las poblaciones comprendidas en la segunda parte del art. 23 cada distrito o colegio electoral remitirá al ayuntamiento una copia de su acta general de escrutinio, y reunidas todas y formada la lista de los concejales electos, se archivarán en la secretaría municipal. En las demás poblaciones el acta general de escrutinio se custodiara en el archivo del ayuntamiento.

Art. 69. Los nombres de los elegidos se expondrán al público en los sitios de costumbre desde el día 12 de Noviembre hasta el 15 inclusive.

Durante este término, los electores presentarán al ayuntamiento las reclamaciones que tengan por conveniente hacer sobre la nulidad de la elección, o sobre la incapacidad de los elegidos, y estos deducirán las acusaciones que quieran utilizar.

Art. 70. Al día siguiente 16 el ayuntamiento en sesión extraordinaria acordará su resolución sobre las protestas hechas en las actas, y sobre las reclamaciones presentadas, dando conocimiento a los reclamantes.

Esta resolución será ejecutoria si contra ella no se hiciera nueva reclamación para ante la diputación provincial, que solo en este caso habrá de examinar y aprobar las actas de elecciones municipales.

Art. 71. La diputación, hasta el 20 de Diciembre declarará definitivamente la validez o nulidad de las elecciones contra que hubiere reclamación. En el último caso, dará conocimiento de su acuerdo al ayuntamiento antes del 31 de Diciembre, ordenándole que disponga se proceda a repetir la elección en el todo o en la parte anulada, a los 15 días de recibida la orden.

Hasta el mismo día 20 resolverá asimismo la diputación todas las reclamaciones sobre incapacidades y escusas.

Art. 72. Cuando se anulare la elección por vicios cometidos en la constitución de la mesa, podrá nombrarse un delegado especial que presida la mesa interina, siempre que el gobernador y diputación provincial, de acuerdo, lo creyeren conveniente.

Art. 73. Si por cualquier motivo no estuviese nombrado el nuevo ayuntamiento para el día 1.º de

Enero, seguirá el antiguo hasta que la elección se verifique y aquel pueda instalarse.

CAPITULO III.

Elecciones provinciales.

Art. 74. Las Diputaciones provinciales, con presencia del censo de población y demás datos que les parezca oportuno consultar, propondrá la división de territorio de las respectivas provincias en distritos electorales, consultando en ella la mayor facilidad en la emisión de votos y comodidad de los electores, separando sólo, en caso de absoluta necesidad, el menor número posible de pueblos de partido judicial a que pertenecieran.

Art. 75. Los pueblos que sean cabeza de partido judicial, lo serán también del distrito para elecciones provinciales.

Art. 76. Cuando en la demarcación señalada a un distrito hubiese más de un pueblo cabeza de partido, lo será de distrito aquel cuyo juzgado fuese de mayor categoría; y si hubiere dos o más en igual clase, la diputación designará el más céntrico como cabeza del distrito. En las poblaciones que tengan derecho a nombrar más de un diputado conforme al art. 6.º de la ley orgánica provincial, las diputaciones formarán los distritos que podrán subdividir con arreglo al art. 23 de este decreto, y los Ayuntamientos designarán los locales para la votación de los mismos.

Art. 77. La división que la diputación proponga, con exposición de motivos que la justifiquen, se imprimirá y publicará como suplemento al Boletín oficial de la provincia, circulándose a todos sus ayuntamientos, a fin de que, tanto estos como cualquier vecino puedan exponer lo que se les ofrezca durante el plazo de 10 días, contados desde la fecha de la publicación.

Art. 78. Espirado el plazo, la diputación hará en el día de ocho días las rectificaciones que tuviere por oportunas, y remitirá el expediente original al gobernador de la provincia para su aprobación, publicándose la división definitiva en el Boletín oficial.

Art. 79. Si el gobernador encontrase motivos para no prestar su conformidad, los comunicará a la diputación provincial, y en caso de que no se obtenga acuerdo se elevará el expediente a la decisión del Gobierno.

Art. 80. No podrá hacerse variación alguna en los distritos electorales, ni en el pueblo cabeza de los mismos, sin seguir los trámites fijados en los artículos anteriores, y nunca se hará menos de 60 días antes de las elecciones ordinarias, ni después de publicar el decreto para las extraordinarias.

Art. 81. Cada ayuntamiento constituirá un colegio electoral donde emitirán sus votos los electores, sirviendo al efecto los distritos y secciones que hayan designado los ayuntamientos con arreglo al art. 23 de este decreto.

Art. 82. Las elecciones ordinarias, que se verificarán cada dos años para la renovación de la mitad de los diputados, comenzarán en el año en que correspondan el primer domingo del mes de Diciembre.

Art. 83. Para la constitución de las mesas interinas y electoral, emisión de los sufragios y escrutinios parciales, se observarán las reglas prescritas en los arts. 31 al 33 inclusive.

Art. 84. «Las papeletas de votación contendrán dos partes: la primera bajo el epígrafe de «Diputados» contendrá el nombre del que como propietario haya de elegirse, y la segunda, bajo el de «Suplente», el de la persona a que se vote para este cargo.

Cuando la papeleta no contenga esta distinción, se

parte de este decreto, explicará el número de diputados que corresponden a cada provincia, con arreglo a la base de uno por cada 45,000 almas, y uno más por fracción de más de 25,000. El mismo estado fijará la división en circunscripciones de las provincias divisibles, con arreglo al art. 93.

Art. 98. Los ayuntamientos fijarán y publicarán, con ocho días de anticipación al designado para la elección, el local en que haya de tener lugar la de cada sección.

En cada sección electoral se hará la votación de su mesa, conforme a lo que disponen los artículos 31 al 49 inclusivos de este decreto.

Lo dispuesto en los artículos 51 al 60 inclusivos de este decreto, respecto de la elección de concejales, se observará para la de diputados a Cortes, entendiéndose que cada elector tiene derecho a poner en su papeleta tantos nombres cuantos sean los diputados asignados a la provincia ó circunscripción a que corresponda el colegio electoral.

Art. 99. Serán nulas y no se computarán para efecto alguno las papeletas en blanco, las no inteligibles y las que no contengan nombres propios de personas.

Art. 100. Cuando alguna papeleta contenga mayor número de nombres que el de los diputados que corresponda elegir a la demarcación, sólo valdrá el voto para los que completan este número, por el orden en que estén escritos; y si no fuere posible determinar este orden, será nulo el voto.

Art. 101. Cuando respecto al contenido de alguna papeleta leída por el presidente mostrase dudas el elector, tendrá este derecho a que se le permita examinarla por sí mismo.

Art. 102. Terminado el escrutinio, el presidente anunciará en alta voz su resultado, según las notas que habrán tomado los secretarios escrutadores, del número de papeletas escritas, del de votos que haya obtenido cada uno de los candidatos, y del de los electores que hubieren tomado parte en la votación del día.

Art. 103. En seguida se quemarán a presencia de los concurrentes las papeletas extraídas de la urna, pero no las que fueren objeto de duda ó reclamación por parte de algún elector, si este exigiere que se unan originales al acta y que se archiven con ella para tenerlas a disposición de la asamblea en su día.

Art. 104. Acto continuo se formarán y exponerán al público, a la puerta del colegio electoral, las listas numeradas de los electores que hayan tomado parte en la votación del día, y el resumen de los votos que en ella hubieren obtenido cada candidato. Ambos documentos serán certificados y firmados por el presidente y secretarios de la mesa electoral.

Art. 105. Concluidas todas las operaciones anteriores, el presidente y secretarios de la mesa extenderán por triplicado y firmarán el acta de la sesión del día, expresando en ellas el número de electores que hay en la sección, el de los que hubieren votado, y el de los votos que hubiere obtenido cada candidato, y consignando sumariamente las reclamaciones y protestas que se hubiesen hecho en su caso por los electores sobre la votación y el escrutinio, y las resoluciones motivadas que sobre ellas hubiese adoptado la mayoría de la mesa, con los votos particulares, si los hubiere, de la minoría de sus individuos.

Una de estas actas, con los documentos originales a que en ellas se haga referencia, se archivará en la secretaría del ayuntamiento; la otra se remitirá, por conducto del alcalde, en el correo más inmediato al gobernador de la provincia, ó al alcalde de la cabeza de circunscripción, y la tercera al alcalde de la cabeza del partido judicial, en pliego cerrado y certificado, en cuya cubierta certificarán también de su contenido dos de los secretarios escrutadores con el V.º B.º del presidente de la mesa. Comunicarán también por el medio más rápido los presidentes de mesa al ministro de la Gobernación en el momento de terminarse el escrutinio del día, un extracto de su resultado, expresando el número de volantes y el de votos obtenidos por cada candidato, por orden de mayor a menor.

Art. 106. Si alguno de los candidatos que hubieren obtenido votos en la elección del día, ó cualquier elector en su nombre, requiriese certificación del número de electores votantes y resúmenes de votos, se le dará sin demora por la mesa.

Art. 107. Si en el primer día de la votación para la elección de los diputados no hubieren dado su voto todos los electores de la sección, a las nueve de la mañana del día siguiente volverá a constituirse el colegio electoral para continuarla, procediendo en ella y en el escrutinio y demás operaciones del acto, con arreglo a lo dispuesto en los artículos que preceden.

Art. 108. Las listas y resúmenes de votos, que habrán estado expuestas al público hasta 24 horas después de terminada la votación del último día, se depositarán originales con las actas en el archivo municipal.

Art. 109. A los tres días de haberse hecho la elección en los colegios, se instalará en la cabeza de cada partido judicial la junta del segundo escrutinio que verificará el de los votos dados en todas sus secciones.

Art. 110. El juez de primera instancia del partido, presidirá sin voto la junta de segundo escrutinio, que se compondrá de un secretario comisionado por cada colegio, el cual será elegido por la mesa después de concluir la votación del último día.

Art. 111. Constituida la mesa a las diez de la mañana en el local destinado al efecto, y después de leerse las disposiciones de este decreto referentes al acto, se dará principio al escrutinio, para lo cual el presidente pondrá sobre la mesa los resúmenes de votos remitidos por los colegios con arreglo al art. 106, y los representantes de las mesas electorales de dichos colegios presentarán igualmente copias certificadas de ellos por las mismas mesas de dichos documentos y de las respectivas actas de los tres días de votación. Unos y otros documentos serán escrupulosamente confrontados por cuatro secretarios, elegidos en el acto por sueldo de entre los comisionados de las mesas.

Estos secretarios con el presidente harán el recuento y resumen de los votos obtenidos por cada candidato, de que se expedirá copia al público en el día; extendiendo acta por duplicado, de la cual remitirá un ejemplar sellado y certificado, en la forma que previene el art. 103, al gobernador de la provincia ó al alcalde de la cabeza de circunscripción, con las actas originales remitidas por las mesas; y el otro quedará archivado en la secretaría del Ayuntamiento de la cabeza de partido.

Art. 112. La junta de segundo escrutinio no podrá anular ningún acta ni voto; sus atribuciones se limitarán a verificar, sin discusión alguna, el recuento de los votos emitidos en todas las secciones del partido, atendiendo estrictamente a los que resulten computados por las resoluciones de las mesas electorales, según las actas de las respectivas votaciones; y si sobre este recuento pudiese ocurrir alguna duda ó cuestión, se pasará por lo que decida la mayoría absoluta de los individuos de la misma junta.

Art. 113. Si con respecto al número de votos y de votantes no hubiese conformidad entre las listas y actas presentadas por el alcalde de la cabeza de partido y las de los representantes de las secciones, se estará al resultado de las segundas, y se pasará el tanto de culpa que pueda aparecer a los tribunales para que se proceda en justicia a lo que hubiere lugar.

Art. 114. Antes de disolverse la junta de segundo escrutinio elegirá a pluralidad de votos un comisionado de entre sus vocales que concurra al escrutinio general de la provincia ó circunscripción.

Art. 115. Dicho escrutinio general tendrá lugar a los ocho días de haberse celebrado los segun-

dos ó de partido en la capital de la provincia ó circunscripción, y concurrirán a él sin voto los diputados provinciales de los partidos comprendidos en ellas.

Estas juntas serán presididas por los gobernadores en las capitales de provincia, y por los jueces de primera instancia de la capital en las demás circunscripciones, no teniendo dichos funcionarios voto sino decisivo en el acto.

Art. 116. Constituida la junta a la hora fijada por el gobernador de antemano en el Boletín oficial, procederá en la forma establecida en los artículos 110, 111 y 112, para la de segundo escrutinio, levantándose acta por triplicado, de cuyos ejemplares quedará uno archivado en la secretaría de la diputación, remitiéndose los dos restantes al ministro de la Gobernación, y acompañando a ellos las actas de primero y segundo escrutinio.

El presidente proclamará diputados por orden de mayor ó menor a los que hayan obtenido mayor número de votos, hasta completar el número de representantes que haya de elegir la provincia ó circunscripción.

Art. 117. Del acta de la junta de escrutinio general se expedirán tantas certificaciones parciales como sea el número de Diputados electos por la demarcación electoral, limitadas a hacer constar la proclamación del diputado a quien cada una se destine, los que tomaron parte en las votaciones, y los votos obtenidos por los que hayan sido proclamados, con expresión de si hubo ó no protestas en las secciones. Estas certificaciones expedidas por el secretario de la diputación provincial ó por el del ayuntamiento, según los casos, y autorizadas con el sello y el V.º B.º del gobernador, serán inmediatamente remitidas por este a los diputados proclamados, a quienes servirán de credenciales para presentarse en las Cortes.

Art. 118. Terminadas las operaciones de la junta de escrutinio general, el presidente la declarará disuelta, y concluida la elección; se devolverán a los archivos de su respectiva procedencia todos los documentos a ella traídos por el mismo presidente y por los representantes de las secciones.

Art. 119. La disposición del art. 90 es aplicable a la sesión de la junta de escrutinio general. En ella, lo mismo que en las de los colegios electorales, solamente se podrá tratar de las elecciones con sujeción a las disposiciones de esta ley.

Art. 120. Diez días por lo menos antes del señalado para la apertura de las Cortes, el Gobierno remitirá a la secretaría de las mismas las actas generales y parciales de escrutinio de todos los distritos electorales de la nación, con las votaciones de las secciones respectivas y demás documentos de la elección, que hubiese recibido de las provincias ó circunscripciones y de los gobernadores de las provincias, y lo propio hará con los de las elecciones parciales inmediatamente que los reciba y estén estas terminadas.

CAPITULO V.

De la sanción penal.

Art. 121. Toda falsedad cometida en el padrón en las cédulas de vecindad, ó en otro documento público, por cualquier funcionario, con el fin de dar ó quitar el derecho electoral indebidamente, será castigado con arreglo a las disposiciones de la sección primera del capítulo 4.º, título 4.º del Código penal.

Art. 122. En el mismo caso estarán los que aplicaren indebidamente votos a favor de un candidato ó candidatos para secretarios escrutadores, para concejales ó para diputados provinciales ó a Cortes.

Art. 123. Serán castigados con la pena de inhabilitación perpetua especial para el cargo respectivo, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos y multa de 20 a 200 duros, los funcionarios públicos de cualquier clase ó categoría que obligasen a un elector a dar su voto, ó impidiesen que le diese alguno de los modos siguientes:

1.º Haciendo salir de su domicilio ó permanecer fuera de él a un elector en los días de elecciones, ó impidiéndole con cualquier otra vejación al ejercicio de su derecho electoral.

2.º Conduciendo por medio de agentes públicos de la autoridad civil, militar ó eclesiástica a los electores para que emitan sus votos.

3.º Imponiendo con promesas ó amenazas a sujetos determinados, designándolos como los únicos que deben ser elegidos.

Art. 124. Incurrirán en la pena de suspensión, multa de 40 a 400 duros ó inhabilitación perpetua especial para ejercer derechos políticos:

1.º El presidente de la mesa que maliciosamente deje de nombrar secretarios para la mesa interna a los individuos de mayor ó menor edad con arreglo a lo prevenido en el art. 31 de este decreto.

2.º El presidente de la mesa que claramente negare ó indirectamente impidiera a los electores usar del derecho que les concede el párrafo 2.º del artículo 39 de este decreto.

3.º El que a sabiendas y con manifestada mala fe alterase la hora en que deben comenzar ó concluir las elecciones.

4.º La autoridad que obligue a sus dependientes a que hagan a sus electores recomendación en favor de determinados candidatos.

5.º El que obligue a comparecer ante sí a electores ó funcionarios dependientes de su autoridad con el mismo objeto.

6.º Las que maliciosamente dejen de proclamar al diputado elegido según la ley, ó indebidamente proclamen a otro.

Art. 125. Serán castigados con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos y multa de 10 a 400 duros:

1.º El secretario escrutador que después de haber tomado posesión de su cargo le abandone ó se niegue a firmar las actas ó acuerdos de la mayoría.

2.º El presidente y secretarios escrutadores que falten a las prescripciones de los arts. 40 y 60 de la ley electoral, negándose a consignar en el acta las dudas y reclamaciones que se presenten, y cualquier protesta motivada.

3.º El presidente de mesa, alcalde ó secretario que no remitan al gobernador de la provincia ó al alcalde del pueblo, cabeza de circunscripción, las copias del acta a que están obligados por el artículo 83 de este decreto.

4.º Los que estando incluidos en el padrón y provistos de cédula, voten sabiendo que están inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos, ó comprendidos en el art. 2.º del presente decreto.

5.º El que vote dos veces, en la misma ó en distinta mesa, en una elección, ó tome el nombre de otro para votar usando cédula ajena, ó teniendo el mismo nombre, sabiendo que no es la persona comprendida en las listas.

6.º El vecino que al formarse el padrón de vecindad se suponga con más edad de la que realmente tenga para adquirir el derecho electoral; y el encargado de formar el padrón que desfigure el nombre de algún vecino con el fin de privarle de dicho derecho.

7.º El elector que con el propósito de ser nombrado secretario escrutador intente faltar a la verdad, suponiendo distinta edad de la que tiene.

8.º Los que quebranten los sellos ó rompan los sobres de los pliegos cerrados a que se refieren los arts. 83 y 403 antes del escrutinio general.

9.º Los jefes militares y marinos que provean de cédula declarativa del derecho electoral a alguno de sus subordinados que no tengan este derecho.

Art. 126. Incurrirán en la pena marcada en el art. 42 del Código y en el de inhabilitación perpetua para derechos políticos:

1.º Los que con dilerios, amenazas ó cualquier otro género de demostraciones violentas intenten coartar la libertad de los electores.

2.º Los que valiéndose de persona reputada como criminal solicitaren por su conducto a algún elector para obtener sus votos en favor de candidato determinado, y el que se prestare a hacer la intimidación.

3.º Los que por medio del soborno intenten adquirir votos en su favor ó en el de otro candidato, y el elector que reciba dinero, dádivas ó remuneración de cualquier clase por votar a candidato determinado.

Art. 127. Los delitos no comprendidos expresamente en esta ley, que se cometieren para impedir la libre expresión del sufragio ó falsear su resultado, se castigarán con arreglo al Código, considerándose siempre como circunstancia agravante la ocasión del delito.

Art. 128. Para los efectos de esta ley se reputarán funcionarios públicos no solo los de nombramiento del Gobierno, sino también los alcaldes, concejales, presidentes de mesa, secretarios escrutadores y cualquier otro que desempeñe un cargo público, aunque sea temporal y no retribuido.

Art. 129. La acción para acusar por los delitos previstos en este decreto será popular y podrá ejercitarse hasta dos meses después de haber sido aprobada ó anulada por las Cortes el acta a que se refiera.

Art. 130. Cuando las Cortes acuerden pasar tanto de culpa al gobierno sobre una elección, se procederá a la formación de la causa en el tribunal ó juzgado competente.

Art. 131. Los tribunales y juzgados procederán desde luego contra los presuntos reos de delitos electorales, sin esperar a que las Cortes resuelvan sobre la legalidad de la elección. Será obligación de aquellos facilitar a las Cortes, siempre que estas lo pidan por conducto del Gobierno, los informes, testimonios de resultancia y demás noticias que estimen convenientes sobre hechos que puedan afectar a la validez ó nulidad de la elección. Si al suministrar estas noticias, la causa se hallare en sumario, los jueces y tribunales harán la oportuna advertencia acerca de las que deban tener el carácter de reservadas.

Art. 132. No se necesitará la autorización del gobernador para proceder contra los funcionarios que cometieren esta clase de delitos.

Art. 133. El Tribunal supremo de Justicia, conocedor de las acusaciones que en virtud de esta ley se establecen contra los gobernadores de provincia u otras autoridades ó funcionarios públicos de igual ó superior categoría. Las audiencias de los respectivos territorios, de las que se presenten contra los diputados provinciales, y jueces de primera instancia. Y los juzgados de que se provean contra alcaldes y demás empleados públicos inferiores en categoría a los ya mencionados, ó cualesquiera otras personas que, por razón de sus cargos, intervengan en materia de elecciones. En todas las causas procederán dichos tribunales sin distinción de fuero.

Aquellas en que ejecutoriamente se exima de responsabilidad por obediencia debida a los acusados, se remitirán necesariamente al tribunal que corresponda, para proceder contra el que hubiese sido debidamente obedecido, y si este hubiese sido ministro, la remisión se hará al Congreso de los diputados para lo que hubiese lugar, con arreglo a las leyes.

Art. 134. Los juzgados no podrán rehusar la práctica de las informaciones relativas a los hechos electorales en cualquier tiempo que se pidan, antes de que haya prescrito la acción para acusar, conforme a lo que se dispone en el art. 129 de este decreto, procediendo breve y sumariamente.

CAPITULO VI.

Del orden en los colegios.

Art. 135. La conservación del orden y la represión inmediata de las faltas que se cometan en las juntas electorales y juntas de escrutinio, quedan a cargo de sus presidentes, a quienes las autoridades, que tendrán libre la entrada en el colegio, prestarán los auxilios necesarios.

Art. 136. Cuando dentro del recinto del colegio electoral se cometiera algún delito de los de amenazas, coacciones ó soborno, penados en este decreto, los presidentes de las mesas remitirán a los delincuentes detenidos a disposición de la autoridad judicial para la instrucción de la causa correspondiente.

Art. 137. Sólo tendrán entrada en los colegios los electores de la provincia ó circunscripción, que podrán hacer reclamaciones y protestas aunque no pertenezcan al colegio.

La entrada del colegio se conservará siempre libre y expedita.

Art. 138. Nadie podrá entrar en el colegio con armas, palo ni bastón, a excepción de los electores que por impedimento notorio tengan necesidad absoluta de apoyo para acercarse a la mesa; pero estos no podrán permanecer dentro del local más que el tiempo puramente necesario para dar su voto. El elector que infringiere este precepto, y advertido no se sometiese a las órdenes del presidente, será expulsado del local y perderá el derecho de votar en aquella elección. Las autoridades podrán, sin embargo, usar dentro del colegio del bastón y demás insignias de su cargo.

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES.

Un decreto especial, que dictará el ministerio competente, dispondrá la forma de llevar a efecto el presente decreto en las provincias de Ultramar.

En consideración a las circunstancias excepcionales en que se encuentran las islas que componen la provincia de Canarias, el gobierno marcará por orden especial los plazos para la formación del padrón y demás operaciones preparatorias de la elección.

Se señala como cabeza de Sección electoral especial a las islas de Fuerteventura, Gomera y Hierro que no tienen cabeza de partido judicial; los pueblos de Oliva, San Sebastián y Valverde, ante cuyos jueces de paz se hará el escrutinio de los votos y se llenarán las demás formalidades prescritas en esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.º Desde el día 15 al 25 del corriente mes, procederán los Ayuntamientos a la formación del padrón de vecindad, conforme al artículo 15 de la ley orgánica provincial.

2.º El padrón se pondrá al público desde el día 26 al 30 del mismo mes, durante cuyo plazo se oirán las reclamaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo citado, resolviendo sobre ellas en las sesiones extraordinarias que celebrarán al efecto los Ayuntamientos desde el día 4.º de Diciembre en adelante, sin interrupción.

3.º Los que no se conformaron con las resoluciones del Ayuntamiento podrán acudir ante la Diputación provincial, que decidirá definitivamente antes del 10 de Diciembre.

La clasificación de los vecinos electores y la extensión y entrega de sus cédulas se verificará por los Ayuntamientos desde el 12 al 20 de Diciembre inclusive.

Los Ayuntamientos procederán a dividir sus distritos municipales en colegios, y subdividir éstos en sesiones donde proceda, con arreglo al artículo 23 de este decreto, tan pronto como el mismo se publique en el Boletín oficial de la respectiva provincia, anunciándola al público inmediatamente.

Madrid 9 de Noviembre de 1868.—El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

MADRID, 10 DE NOVIEMBRE DE 1868.

EL OBISPO DE OSMÁ

AL GOBIERNO PROVISIONAL.

EXCMOS. SRES.:

Apenas recobrado del asombro que me causaran las calamidades que en el último mes han venido de tropel sobre la Iglesia de España, y trémulo todavía de espanto por los nuevos males que la amenazan, he leído el manifiesto que VV. EE. han dado a la nación, para cuyas graves heridas no puede pronosticarse desgraciadamente por este documento el alivio más ligero. Tan lejos de esto, se encontrarán más y más, con los remedios que en él se prescriben, las inveteradas y profundas llagas que há tanto tiempo la atormentan, y se probará prácticamente, por lo tanto, que, si se ha querido curarlas, se ha errado por completo la curación.

La verdad de este aserto solamente la negará quien no quiera ver en esos remedios un fatal empirismo, adoptado en nuestro suelo por la tiránica moda, rechazado por la ciencia en todos tiempos, y cubierto de eterno descrédito por largos y tristes experimentos.

Está patente, señores, en el manifiesto el funesto doctrinarismo, arrumbado desde su origen por los políticos sabios; pero un doctrinarismo en progreso, un doctrinarismo refinado, y como tal, el más opuesto a la libertad. Un doctrinarismo que se fué, y que ha vuelto perfeccionado para causar a la patria desgracias mayores que las que le ha causado aquel. Se creyó que el doctrinarismo desaparecería ahora para siempre, y nos encontramos de frente con un doctrinarismo incomparablemente peor.

Y esto que afirmo no es mera declamación, no. Cotejando el manifiesto con los terribles decretos dados recientemente contra la Iglesia católica, y con otros decretos también, le basta y le sobra a cualquiera para quedar plenamente convencido de que digo una verdad tan clara, que de ningún modo podrá nadie tergiversar. Las contradicciones e inconsecuencias que advertiría son manifiestas, palpables, evidentes, y están a la vista de toda la nación.

No es mi ánimo el hacerlas resaltar examinándolas, ni menos el indicar siquiera qué es lo que constituye la autoridad legítima; para que yo pretenda disputarle la suya, en el orden político y civil, al gobierno provisional. No voy a engolfarme en consideraciones de un orden político, pues las dejo a un lado para concretarme a las que son de mi competencia con especialidad.

Por eso no hablaré, ni aun incidentalmente, de formas de gobierno, y ni siquiera de eso que se vislumbra, y no es tal forma, sino el acto de alquilar un hombre para vestirle de rey, ponerle delante y prohibirle gobernar, declarándole además irresponsable, y exigiéndole tal vez a la postre la única responsabilidad que se exigirá.

No, señores: VV. EE. saben muy bien que la Iglesia católica admite todas las formas de gobierno en los Estados civiles: que solo son incompatibles con ella las que la persiguen y no la dejan continuar la grande obra de la verdadera civilización y del verdadero progreso: que todas pueden ser buenas ó malas, según sean los hombres que manden y las condiciones de cada país; y que ella, que sacó al hombre de la esclavitud diez y nueve siglos há, y es madre de la libertad, aborrece y condena el despotismo y la tiranía, ahora los ejerza un hombre solo, ahora unos pocos en nombre propio ó ajeno, ó ya los ejerzan mil a la vez.

Melimitaré, pues, a lo que he indicado, fijándome tan sólo en un punto que VV. EE. han considerado, muy fundadamente por cierto, como la principal manifestación de esas que, según el manifiesto, ha hecho el espíritu público durante los acontecimientos políticos que acaban de tener lugar. Ya se comprende que hablo de la libertad religiosa: de la libertad religiosa no, porque no hay tal libertad práctica en ninguna nación, ni la puede haber, pues, para que haya nación, es preciso que haya sociedad; y sociedad y libertad religiosa son dos cosas que mutuamente se repelen. Llamémosla, por consiguiente, diversidad ó pluralidad de cultos externos.

Pero el espíritu público, señores, no ha hecho semejante manifestación; y esto es tan claro, como claro es que el espíritu público no es el espíritu de algunas docenas de hombres en unas cuantas poblaciones grandes, y de alguno que otro en algún pueblo de menor extensión. Ni ese espíritu puede ser interpretado por las juntas que hicieron la precitada manifestación; pues, aparte el que nadie les ha encomendado tan gravísimo asunto, ni aun en su respectiva localidad, todo el mundo sabe cómo se forman y se han formado siempre en nuestras discordias civiles, cuán contradictorios han sido sus programas, y cuán faltos han debido de estar todos sus miembros, ó por lo menos algunos, no solo de espontaneidad, sino también hasta de voluntad y de libertad.

Por eso no puede decirse, como se afirma en otro documento oficial de 49 de Octubre último, que ha sido anunciada la admisión de la pluralidad de cultos, «sin que las conciencias se alarmen y sin que una voz discordante venga a turbar el general concierto.» No puede decirse eso, no. ¿Cómo se ha de poder decir? ¿Quién se mete en la conciencia ajena, y quién juzga del interior de cada cual? ¿Cómo, pues, puede decirse que las conciencias no se han alarmado? Yo

creo, por el contrario, que sí. No lo puedo afirmar, como afirma que no el escrito precitado; pero lo deduzco con muy legítima y natural ilación, del mismo documento, cuando dice perfectamente bien, que «España ha sido y es una nación esencial y eminentemente católica.»

Luego, si es así, como lo es, puede asegurarse con fundamento que las conciencias se han alarmado, y que estas conciencias son las de toda la nación. La nación católica, y con mayoría de razón si es esencial y eminentemente católica, no puede menos de alarmarse al saber que se trata de quebrantar la unidad de su religión, introduciendo religiones falsas, y de abrir los cimientos de templos que no han de ser dedicados al verdadero Dios. Si hubiese católicos que no se alarmasen por ello, aunque no previesen todos los males que con esto han de venir, no podría comprender yo su catolicismo, no ya en grado eminente, pero ni siquiera en otro más inferior. Señores: que ya todo el mundo sabe de política.

Va sabe que lo que el espíritu público quiere es que le dejen vivir tranquilo en la religión de sus mayores, única verdadera, y con la cual fué y será siempre feliz, que no se le empobrezca con tributos, que a mayor abundamiento sirvan para cosas de lujo y de ninguna necesidad; que se le gobierne bien, en fin. De este espíritu público respecto de media España, puedo deponer yo de vista; otros depondrán de la otra media, y todos de toda ella, de público y notorio, de pública notoriedad. ¿V cómo es posible, por otra parte, que el espíritu público quiera pluralidad de cultos? Señores, nadie quiere lo que no conoce; y yo conociendo el espíritu público de España, y esto es evidente, ninguna falsa religión, mal puede querer que se la plantee en nuestra tierra.

Peró, y la voz discordante ¿dónde queda? Muchas voces han discordado, muchísimas, solo que no se han publicado en la Gaceta, como se ha publicado el anuncio. ¿Quién las había de publicar? Yo no sé si por lo alto habrá discordado: por lo bajo habrá discordado sin duda toda la nación. ¿Que no ha habido una voz discordante! Pues qué, ¿era por ventura tiempo para discordar de viva voz? ¿Había acaso establecida alguna siquiera presunta legalidad ante quien hacer las oportunas declaraciones? ¿Tantos días habían pasado, para que se dijese el 49 de Octubre que no había discordado una voz? El tiempo de revueltas y anarquía, como la que necesariamente traen consigo los primeros días de un pronunciamiento, ¿es tiempo para hacer protestas contrarias a lo proclamado por los hombres de aquel? ¿No está, aun hoy día, amenazando a la prensa católica otra prensa que no lo es?

Continuarán discordando muchas voces; discordará toda la España ostensiblemente en el terreno legal. Entonces, señores, se verá si es inútil, como VV. EE. dicen en su manifiesto, toda resistencia a la introducción de cultos falsos en esta tierra leal. Entonces se verá que la opinión de VV. EE., según lo que yo opino, era infundada opinión.

Pero si realmente fuese inútil, y lo será tal vez si se impone la pluralidad de cultos, cualquiera que sea quien la imponga; si a la fuerza, y no voluntariamente, según se expresa en el manifiesto, se regala tal presente al pueblo español, ¡oh! entonces, según lo que VV. EE. asientan, y «so pena de contradecirse interrumpiendo el lógico encadenamiento de las ideas modernas, en las que busca su remedio la nación,» el pueblo español tiene que admitir el comunismo, el islamismo, el sansimonismo, el mormonismo y otras extravagancias no menos atroces. No hay otro camino: ese es el encadenamiento lógico de las ideas modernas, y por consiguiente, según VV. EE., España no tiene remedio, si no lo busca en el mormonismo... Señores, no más; si las hijas y esposas de VV. EE. supiesen lo que es esto, que no lo sabrán tal vez y es mejor que no lo sepan, se cubrirían el rostro de rubor.

Si no lo quiere el pueblo español, no puede ser, como se afirma, una necesidad de nuestro estado político, ni una necesidad de la época presente, la pluralidad de cultos en España.

La tolerancia civil de la pluralidad de cultos sería acaso una necesidad del estado político en un país que, hallándose dividido en guerras religiosas, más ó menos encarnizadas, no pudiera tener paz, sin que a los contentidos se les concediese el ejercicio de su culto. Así se ha establecido la tolerancia en todas las naciones donde la hay: así lo dice la historia, y si no lo dijera, habría que suponerlo. Nunca los Gobiernos han cometido en ninguna parte el enorme desacierto de introducir espontáneamente entre sus gobernados elementos de discordia cultos son y más temibles que cualesquiera otros, los que trae consigo la diversidad de cultos.

Y si España no está en ese estado político; si aquí por fortuna no hay guerras de religión; si el país es esencial y eminentemente católico, como se reconoce y confiesa en los documentos citados; si el sentimiento católico se mantiene vivo entre nosotros, como así se reconoce y confiesa también, ¿qué razón hay para que el poder público proclame lo que nadie le pide, lo que nadie debe de pedirle, atendidas las confesiones del mismo poder, lo que nadie le pedirá de seguro, atendido nuestro estado político y social?

Y aunque algunos le pidan la pluralidad de cultos, un gobierno que lo sepa ser ¿variara la Constitución de su país hecha por los siglos, exponiéndole a convulsiones terribles y sin cuento, y se opondrá, solo por dar gusto a unos

cuantos, que no practican religion ninguna, á la voluntad de diez y ocho millones de habitantes que profesan la única verdadera religion?

Quando las sectas y otras falsas religiones se están desmoronando en todas partes; cuando muchos de sus secuaces, alumbados por la luz de la verdad, entran en la Iglesia de Jesucristo, ¿han de ser los españoles quienes las acojan en sus brazos, entregándoles su querida patria para que les sirva de puntal, enciendan en ella el fuego devastador de intestinas luchas, y la conviertan acaso en sierva de extranjeras influencias? Mas no habia visto, señores, lo que á continuación se dice de «medida de seguridad contra dificultades eventuales.»

Esto no lo comprendo. ¿Contra qué eventualidades ha de ser la libertad de cultos medida de seguridad? ¿Medida de seguridad la pluralidad de cultos en España, que segun confesion propia es esencial y eminentemente católica? Esto no se entiende. Ya que no se hace sino afirmar sin probar, como en todo lo demás, con negar la afirmacion quedaria destruida. Pero ¿es posible que la discordia, que los cultos falsos sean nunca medida de seguridad?

La historia y la razon dicen lo contrario; y si no convence la historia ni la razon, tal vez convencerá lo que Palmerston dijo á un español, á quien VV. EE. conocerán quizás mejor que yo: «Esta mano me cortaria, exclamó aquel político señalando la derecha, por tener en Inglaterra la unidad religiosa que tiene España.» Señores, evidentemente Palmerston no opinaba como VV. EE. Si hubiera juzgado que la pluralidad de cultos en una nacion es medida de seguridad contra algo, de seguro no se hubiera entusiasmado por la unidad religiosa. ¡Desdichada mil veces España si á su division en política se agregase la division religiosa!

«Que no se vulnerará la fé, se añade, por autorizar el ejercicio de otros cultos: que antes bien se fortalecerá en el combate y rechazará con el estímulo las tenaces invasiones de la indiferencia religiosa.» Segun lo que se quiera entender por vulnerar; y respecto del combate estamos conformes en que los combatientes se hacen fuertes con él. Segun este principio, convendria que tuviésemos guerra siempre, á fin de tener siempre soldados fuertes. Por lo demás, señores, hasta ahora todos los hombres han creído, y no dejarán de creerlo nunca, que con la pluralidad de cultos no se rechazará las invasiones de la indiferencia religiosa, sino que precisamente sucederá todo lo contrario.

No se comprende por cierto que no sea un estímulo, sobre todo entre ciertas personas, para dárseles lo mismo por un culto que por otro, y quedarse sin ninguno al fin, el hecho de verse uno rodeado de cinco ó cincuenta cultos.

Se dirá, como en el otro documento aludido, que la concurrencia en la esfera religiosa... es necesaria para suministrar pasto á la actividad del clero. Pero, señores, esa concurrencia y esa actividad pueden darse muy bien sin que aquí se nos introduzcan sectas; y nuestro gran Balmes, que las derrotó, es una prueba de ello. Por otra parte, si esa concurrencia y esa actividad pueden justificar la pluralidad de cultos, será bueno dejar entrar la fiebre amarilla: ábranse los puertos de España á la peste negra y al bubon; paso al cólera hasta Madrid; vengan todas las pestes, juntas ó separadas, en concurrencia con la salud, que así es necesario para suministrar pasto á la actividad de los médicos.

«Esa concurrencia en la esfera religiosa impedirá además que la religion se una en extraño y poco digno maridaje con los actos del Gobierno.» Así habla el mismo documento oficial; ó como dice el manifiesto será una protesta contra el espíritu teocrático. ¡Protesta contra el espíritu teocrático! Definamos, señores, que por no definir las palabras ha estado y está el mundo perdido, entendiéndolas mal ó al revés. El pueblo, por otra parte, se va acostumbrando á no dejarse alucinar: espera y quiere hechos: no le bastan las afirmaciones y negaciones: exige ya pruebas. ¡Tantas veces ha sido chasqueado! Ese espíritu teocrático es la influencia del Clero en el Gobierno del país? ¿Sí? ¿Es eso lo que se quiere significar y lo que se quiere prevenir?

Pues si eso es malo, es preciso empezar renunciando de los Deza, de los Perez de Marchena, de los Talavera, de los Gimenez de Cisneros, de... es preciso protestar contra el espíritu teocrático de la grande Isabel I. Y eso, ¿lo hará algún español? No, jamás. Ese espíritu teocrático dió á España un nuevo mundo: é importancia colosal, las victorias de Pavia, de Lepanto y de San Quintín; el Escorial y tantas y tantas grandezas que no le han dado, ni de seguro le darán, los que se jactan de ser enemigos de la teocracia; los que atribuyen á esta los desastres que ellos, sólo ellos y sus amigos han causado á la patria. ¿Quién ha dicho, señores, que desde muchos años ha haya influido el Clero en la gobernacion de España? ¿Dónde está esa influencia? ¿Quiénes la han ejercido? Cuando y con qué motivo?

El clero, lo que en vez de influencia ha tenido, es la desgracia de ver que al soplo de los huracanes revolucionarios desaparecian, juntamente con el fruto de sus privaciones, el caudal de los pobres, la riqueza y la prosperidad de España; que se le oprimía, se le vejaba, se le escarnecía y hasta se le asesinaba. ¡Extraña influencia por cierto la que en los últimos treinta y tantos años apenas ha permitido al Clero dejar la pluma de la mano para protestar contra las disposiciones que le han empobrecido y vilipendiado, y hacían al mismo tiempo á la Iglesia de España esclava del poder secular! Yo de mí sé

decir que, á pesar de la pretendida influencia, tengo en mi Obispado dos graneros por templos, y ruinosos una parte de los demás, sin que puedan repararse ni con seis millones de reales.

No dirán, pues, los fieles de esta diócesis lo que del espíritu teocrático dice el Gobierno provisional. A ningún Gobierno, incluso por supuesto el que acaba de caer, debo el que me haya oído en las cosas de justicia; gracias nunca se las he pedido. Lo mismo supongo, con muchísima razon, que les habrá sucedido á los demás Obispos de España, pues á todos les he visto representar contra los actos de los Gobiernos en materias eclesiásticas; y lo mismo que los míos, por consiguiente, podrán responder los diocesanos de aquellos.

En consecuencia de todo, el estado actual de España, tal cual es, no se debe, absolutamente en nada, al espíritu teocrático, no; se debe á los Gobiernos y á la influencia de los que les han ayudado en su obra, desempeñando puestos importantes en la administracion.

Ellos son ante la historia y ante los hombres de buen sentido los únicos responsables de lo que se ha hecho. El clero no quiere para sí, porque no le corresponde, ni aun la menor parte de la gloria ó ignominia que la posteridad reservará para los que han traído á la nacion española al estado en que se encuentra.

Se ha hecho acaso temible el espíritu teocrático porque en los dos últimos años y en los últimos á ellos anteriores, mandaron muchos hombres de los que tambien hoy mandan? ¿se han convertido algunos antiguos conventos en colegios para misiones de Ultramar, y en cuyo establecimiento tenían grandísimo interés material el Gobierno y la nacion? Pues entonces, señores, no puede dudarse de que en los Estados-Unidos de América, en Inglaterra y Turquía, ha sido el espíritu teocrático más afortunado que en España, porque en cada una de esas naciones se han fundado en los años á que se alude muchos más colegios y conventos que en nuestra católica nacion.

No hay, pues, señores, necesidad alguna de traer á nuestro suelo la pluralidad de cultos para protestar contra el espíritu teocrático. En todo caso, VV. EE. deben abandonar la idea de que se autorice aquí esa pluralidad, la cual deben combatir en todas sus fuerzas para no echar combustible en la hoguera que, ha tanto tiempo, arde en nuestro desventurado país. La patria lo agradecerá.

Búrgo de Osmá 8 de Noviembre de 1868.—Pedro María, Obispo de Osmá.

Hoy nos toca ser ministeriales del Sr. Figuerola.

Bien estudiado su famoso plan de capitacion en sustitucion á la contribucion impopular de consumos, encierra un a idea eminentemente social y descentralizadora digna de todo elogio y de resultados trascendentales.

Al pronto no habíamos caído en ello; pero nos ha hecho adivinarlo el saber que algunos propietarios de casas de Madrid se van á reunir para tratar acerca de los perjuicios que puede acarrearles dicho impuesto. La cosa es evidente: si yo pago 8.000 rs. por alquiler de casa en Madrid y se me imponen 6.000 por la capitacion, y no bajan los artículos de consumo, es indudable que el residir en Madrid me cuesta sobre 20.000 rs. más que habitar en un pueblo de provincias, y eso sin contar los demás gastos á que me obliga la residencia en las grandes poblaciones. Resulta, pues, que es un desatino vivir en la corte solo por el gusto de asistir á meetings al aire libre, de oír pregonar periódicos por las calles, etc., etc.

Gracias, pues, al Sr. Figuerola se repoblarán las aldeas y se dará el más rudo golpe á la centralizacion en las ciudades.

El domingo por la mañana se verificó en la iglesia del primer monasterio de las Salesas la consagracion del nuevo Obispo de Oviedo, señor Sanz y Forés. Fué padrino el señor marqués de Vieda de Bibal, consagrante el Nuncio de S. S., y preladados asistentes el Patriarca de las Indias y el Obispo auxiliar de Madrid.

Damos nuestro parabien al nuevo Prelado, y principalmente á la diócesis de Oviedo, que va á ser regida por un varon tan esclarecido por su talento, por su saber y por sus virtudes.

Dice La Epoca que el grande empeño del Gobierno del vecino imperio era que se diese el decreto sobre auxilios á las compañías de ferrocarriles.

El Gobierno de Napoleon ha sido, pues, complacido por el Gobierno provisional.

Segun los diarios de la situacion, el ministro de Gracia y Justicia va á conceder permiso á un inglés para erigir en Madrid un templo protestante.

Ignoramos si el hecho es cierto; pero si lo es, el Sr. Romero Ortiz se excede de las facultades de que está investido como miembro del gobierno provisional.

Con la concesion de levantar un templo no católico en España cambia de un golpe y por completo las leyes fundamentales de nuestra nacion, no solo esas leyes constitucionales, debidas al liberalismo, sino las leyes seculares arraigadas en las entrañas del pueblo.

¿Tiene facultades para eso un ministro?

No las tiene como ministro revolucionario, porque la cuestion de libertad de cultos no se ha sometido al sufragio universal; y tampoco las tiene como ministro católico que debe respeto á los principios fundamentales de nuestra sociedad.

Mire bien lo que hace el Sr. Romero Ortiz antes de atentar de la manera que se indica á las leyes y á los sentimientos del pueblo á quien se proclama soberano.

Una pregunta.
La Discusion ha recibido hace algunos dias una carta de nuestro amigo el Sr. Salamero, proponiéndole la publicacion de una refutacion suya á la obra de Renan. Esta carta era sumamente atenta y honrosa para el director del periódico democrático, y, que nosotros sepamos, todavia no se ha dignado insertarla. ¿Por qué?... No lo sabemos; pero si podemos asegurar que la proposicion que se le hizo en aquella carta cabia perfectamente en los principios y en las doctrinas que sustentan constantemente La Discusion, y que muchos periódicos, aun de aquellos que no son de nuestra comunión, la han celebrado y aplaudido.

Los admiradores de Renan, si es que los tiene aun, le han alabado únicamente como orientalista, y le han encomiado por su exegesis alemán. Pues bien; el Sr. Salamero puede combatirlo en uno y otro terreno; y si el periódico republicano cree que no, déjelo hacer que en ese concepto más ganarán los suyos que los nuestros.

Y ¿no podríamos creer tambien que La Discusion, entre cuyos lectores hay muchos católicos, no ha querido publicar la carta que ha recibido por temor de que sus abonados le obliguen á aceptar la propuesta? ¿Por qué, pues, no permite que sus suscritores ilustren suficientemente sus juicios. Toda vez que inserta ya la obra del impío francés?

El Sr. Salamero, en la confianza que le inspira su bondad, se está ocupando actualmente en la refutacion que ha prometido, y necesitamos todos que La Discusion conteste, cuando menos, á esta pregunta:

¿Por qué no acepta la proposicion que se le hace? Estamos con el oído atento.

Los monárquico-constitucionales no las tienen todas consigo. Como saben que el pueblo ha visto caer con la mas completa indiferencia, si uo con la mas profunda satisfacción, la monarquía constitucional española, tratan ahora de hacerle entender que la institucion no era mala por mas que lo haya parecido.

Véase cómo se explica La Iberia respecto de este punto, dirigiéndose á los revolucionarios: «...no imaginando ciegos que puede ser mala una institucion, porque á su sombra se cobijen pobres mundanales. Separados los vicios, queda la institucion, y queda firme como la roca á quien no pudieron quitar nada de su consistencia los inmundos polipos que se le adhirieron»

Esto es tocar á llamada para que los revolucionarios se agrupen en derredor del trono constitucional que se está confeccionando. Pero La Iberia no tiene en cuenta que esos inmundos polipos que se adhieren al trono son hijos de la espuma que brota naturalmente de la institucion; y que si ayer habia pegados á ella ciento, mañana habrá doscientos, con lo cual no habíamos adelantado gran cosa.

Déjese La Iberia de añejas y desacreditadas fórmulas tales como la de que el rey reina y no gobierna; pasó ya el tiempo de los emplastos y ha llegado ya el de penetrar sin miedo en el fondo de las cosas.

Leemos en El Estandarte:
«Recomienda el general Prim en su última circular la disciplina al ejército. La disciplina es, segun eso, un gran mérito, en concepto del ministro de la Guerra; la indisciplina es una falta gravísima, que deshonra y merece castigo. Si es así, ¿cómo se explica, qué razon puede darse para tener sin colocacion á los beneméritos oficiales que han sido fieles á la disciplina? Quisiéramos que alguien nos contestara»

La siguiente indirecta es de El Pueblo, diario democrático:

«Dice El Pensamiento:
«Cese, pues, de la demolicion de iglesias, ya que no por respeto á la religion, por deferencia á las damas españolas.»

¡Bonosa es por demás la salida de estos jesuitas de hábito corto! Se figura el diario absolutista que la galantería no tiene sus límites, y que los hombres que han espuesto sus vidas por el triunfo de la revolucion van á doblegarse ante unos cuantos arrumacos engañosos para entregarnos atados de pies y manos á nuestros encarnizados enemigos, únicamente porque así se le antoje á unas damas que se meten á hablar de lo que no entienden? Esto ya pasa de chanza, y ya que EL PENSAMIENTO se trueca en D. Quijote de tantas Dulcineas, tenga entendido que casi todas las aventuras del hidalgo de la Mancha, en la obra inmortal de Cervantes, dan por resultado que sea molido á palos el protagonista.»

No se asusten nuestros amigos por eso de los palos; porque el mismo diario democrático, hablando en un suelto, que inserta á continuación, de ciertas cuestiones entre liberales relativas á destinos, dice: «Como buenos y leales demócratas queremos la libertad para todos.»

Dice El Siglo:
«Hace algunos dias que se aseguró haber dispuesto el gobierno fuese cubierto por tropa de la guarnicion el servicio de la guardia del Principado que sigue prestando la fuerza ciudadana, como se ha hecho en los demás puntos de que se habia encargado la misma desde los primeros momentos de la revolucion. Esta medida ha encontrado, segun parece, algunas dificultades, y así debe suceder cuando no se lleva á efecto.»

Bueno seria que los periódicos de la situacion aclarasen lo que sobre este punto ocurre para no dar lugar á los comentarios que se hacen en diversos sentidos, por lo mismo que es difícil explicar satisfactoriamente el hecho á que nos referimos.»

El Estandarte escribe estos significativos párrafos:

«El rompimiento entre los demócratas monárquicos y los republicanos producirá resultados de trascendencia en la esfera gubernativa.

El primero que se anuncia es la cesantía de los gobernadores tenidos por republicanos, á fin de que no puedan influir en favor de los candidatos

de este partido en las próximas elecciones. Ascenderán á ocho las cesantías, segun se asegura.
Excusado es decir que los demócratas republicanos se hallan poseídos de ira contra sus antiguos correligionarios, que militan hoy en las filas ministeriales. Achañándose esa anunciada persecucion, truenan contra ellos, acusándolos de inconsecuencia con palabras durísimas. No es de extrañar su resentimiento, aunque nosotros no lo censuramos ni lo aplaudimos; pero no es de extrañar, si se considera que para ellos estarán cerradas quizá las puertas del Parlamento, mientras los que llaman inconsecuentes las tendrán abiertas de par en par y disfrutarán de influjo y pingües destinos.

Dicen algunos periódicos que los demócratas desairados por la cuestion electoral piensan hacer una ruidosa protesta contra el empréstito.

Esta protesta tendria una gran significacion política, muy importante porque se apoya en una medida económica, terreno escogido al parecer para un rompimiento pacífico, por la democracia republicana.

Dicese tambien que si esto sucediera, la casa de Rothschild, que se halla en tratos para cubrir el empréstito, desistiría de su proyecto, por no correr riesgos.

Dicese, por último, que los adversarios del empréstito creen que esta operacion costará al Estado cerca de 4.600.000 millones.

Dice Las Novedades que la peticion de los obreros al general Prim es una añagaza visible de los reaccionarios.

Reaccionarios somos nosotros, tan reaccionarios como el que más, y sin embargo, no sabemos una palabra de esa y otras añagazas que se nos atribuyen.

Por lo visto somos reaccionarios inconscientes.

Por decreto del 2 de Noviembre se promueve á mariscal de campo al brigadier de artillería don Luis Bassols y Maraños, brigadier de artillería.

Tambien han sido promovidos á tenientes coroneles de artillería los comandantes D. Federico Verdugo y D. José Gil de Leon, y á comandantes D. Juan Lopez Pinto y D. Francisco Rodriguez de Carasa que eran capitanes.

El señor ministro de la Guerra dijo ayer á los capitanes generales de los distritos lo siguiente:

«Disponga V. E. que todos los jefes y oficiales que hallándose de reemplazo ó en activo, hayan sido destinados á cuerpo ó trasladados á otros, se presenten en su nuevo destino precisamente para la revista del corriente mes.»

Por decreto del 9 ha sido derogado el art. 266 de la ley de Instruccion pública de 1857 y el artículo 77 del reglamento de 1859, en los cuales se marcan las condiciones que han de tener los secretarios y oficiales primeros de las Universidades.

Se ha dispuesto por orden del 10 del actual que los alumnos que han hecho los estudios de segunda enseñanza en seis años quedan exentos de cursar el año preparatorio correspondiente á la facultad en que se matriculen.

Durante la segunda semana de Octubre ingresaron en la Caja de Depósitos 461.613.814 escudos en metálico, y fueron devueltos 624.732.359, quedando un saldo de 124.081.388,857 escudos.

El saldo de la Caja contra el Tesoro ascendia á 424.013.112,462 escudos, es decir, que el fondo de reserva de la caja consistia en 68.276.395 escudos, ó sean 682.763 rs. 95 céntos.
¡Bonita perspectiva!

Copia El Siglo de los periódicos de la situacion la noticia de las honras por los muertos el 22 de Junio y luego añade:

«En efecto, aquello del 22 de Junio es de triste recordacion. A la raiz de aquellos sucesos, nadie hubiera podido prever que á los dos años habian de estar en un mismo campo los vencidos y vencedores.»

El jefe del gobierno provisional debe sufrir mucho con estos recuerdos, porque tuvo que castigar y vencer aquella sublevacion, por cuyos servicios se le agració con el toison de oro, si mal no recordamos.

Tambien debe sentirse apenado por la sangre derramada entonces el digno ministro de Gracia y Justicia Sr. Romero Ortiz, que era el 22 de Junio subsecretario del propio ministerio.»

La Crónica de Badajoz da cuenta de los atropellos contra la propiedad y los individuos, que se están cometiendo en aquel país. Dice que en varios pueblos de la provincia los proletarios han decidido repartirse los bienes de propios y los de particulares y que en muchos de ellos reina la anarquía, habiendo tenido la fuerza pública que intervenir. A pesar de estos esfuerzos y de la sangre vertida para contener á los revoltosos, el mal ejemplo ha sido imitado en muchas partes, habiendo pueblos donde no se respeta para nada la seguridad individual.

Hoy se ha fijado el bando en que se anuncia la aparicion del nuevo cuerpo de orden público. El señor gobernador dice lo siguiente:

«Libre de tradiciones y de funestos recuerdos, estos agentes no tienen agravios que vengar ni órdenes arbitrarias que cumplir. Delegados de mi autoridad y revestidos de toda su fuerza, van á representar cerca de vosotros el orden, la confianza y la seguridad individual, honrosamente garantizados por los antecedentes de estos individuos, cuyas penalidades y sufrimientos personales por el triunfo de nuestra revolucion he podido apreciar exactamente. Son por lo tanto hijos del pueblo, enlazados á él por su organizacion y por su origen. No tienen la mision de ofender y vejear, sino la de proteger al débil, la de extender por todas partes el poder de la justicia y de la ley, conservando íntegras y en todo su prestigio las instituciones que vosotros os habeis dado.»

Las señoras que componian en Valladolid la conferencia de San Vicente de Paul, han elevado á Gobierno provisional una exposicion pidiendo se sirva autorizarlas para que se vuelvan á reunir en la forma que lo venian haciendo para visitar y socorrer á los pobres.

La France, hablando de la circular del general Prim al ejército, prohibiendo que los militares tomen parte en las cuestiones políticas y de partido, la elogia mucho diciendo que es un documento lleno de los más saludables y prudentes consejos. Pero despues de los elogios á la circular y á los principios que sienta sobre la disciplina militar, dice:

«¿Quién ha escrito y firmado esta circular? El general Prim, el compañero de Serrano y de Topete, el mismo que ha hecho tantos pronunciamientos en su vida, el promovedor más activo del último movimiento militar, cuyo resultado ha sido el destronamiento de Isabel.»

«Teniendo hoy la responsabilidad del poder, el general Prim quema sus naves; proclama las máximas más sanas; dice á sus compañeros de armas: «no os metais en política», y subordina el ejército á la nacion y no la nacion al ejército.»

«No quiera Dios que debilitemos en lo más mínimo la autoridad de su lenguaje; el ejército español hará bien en conformar su conducta á la circular: es el único medio de salir de la anarquía. Pero hay que reconocer que el general Prim no ha predicado con el ejemplo, y que sus actos de ayer no están de acuerdo con sus consejos de hoy.»

La France cree que, por lo mismo, es más significativa la actitud del general Prim.

El mismo periódico dice en otro lugar, con referencia á cartas de Madrid, que muchos de los nuevos gobernadores son periodistas y gente joven, que aunque tiene muy buenas intenciones, no sirven para el caso por lo mismo que son novicios y no están prácticos en la administracion.

El Monde dice que Serrano y Topete quieren al duque de Montpensier para rey de España y Prim á D. Fernando de Portugal.

Otro periódico dice que se ha tratado con el duque de Montpensier para que acepte la regencia de D. Alfonso de Borbon. Parece que el duque ha contestado, que «ó rey ó nada.»

O César ó nada, dijo
Y se quedó siendo nada.

Mañana será disuelto el Parlamento inglés. Mucho ha trabajado Disraeli para conservar el poder que se le escapa; pero sus esfuerzos no son bastantes para triunfar. Con la última hora del Parlamento sonará probablemente la última del ministerio y la primera de la libertad de los católicos de Irlanda.

«Desde O'Connell, el movimiento católico es irresistible, dice el Monde; despues de la conquista violenta de Irlanda por Inglaterra, la conquista moral de Inglaterra por Irlanda; despues del yugo intolerable de la fuerza material impuesto por el vencedor, el yugo suave de la religion y del amor vencido.»

«Extraña reciprocidad de influencia, tan honrosa para Irlanda, que ha vuelto bien por mal, fé en cambio de la opresion! La católica Erice, ligada á la herética Inglaterra como á un cadáver, comunicó á la muerte la vitalidad de su fé, justificando así la gran frase de la Escritura, que dice que el Salvador hizo curables á las naciones: et sanabiles fecit nationes.»

El Patriarca griego de Constantinopla no quiere que los cismáticos vayan al Concilio ecuménico; rechaza la invitacion de Pio IX, en la cual prueba que los cismáticos como los protestantes temen á la Iglesia católica, y no se atreven á defender sus doctrinas en el Concilio.

Un periódico radical y anticatólico de Berlin, la Staats-bürgerzeitung, censura vivamente al liberalismo vulgar que aplaude la supresion de los jesuitas: he aquí algunos de sus párrafos.

«Por la supresion de los jesuitas, el Gobierno provisional se ha puesto en contradiccion con los derechos concedidos á los españoles por la revolucion.

«Los jesuitas son una asociacion que goza de derechos civiles y cuyo fin y tendencias nadie desconoce: son únicamente el interés de la Iglesia católica, y la propagacion de sus doctrinas es el medio de que se valen. En esto nada hay de reprehensible. Toda asociacion religiosa ó política se vale de los mismos medios y busca fines análogos; ¿por qué, pues, en un Estado que proclama el derecho de asociacion, no han de gozar los jesuitas del derecho de formar una asociacion como otra cualquiera?»

«Algunos liberales, para quienes la supresion de los jesuitas es una palabra de orden, dicen que en el empleo de sus medios, los jesuitas traspasan los límites de lo justo, y que de esta manera hacen un mal incalculable al género humano.

«Supongamos que esto es cierto, aunque la historia nos haya enseñado que del mal causado por los jesuitas ha tenido la culpa la estupidez de las víctimas; nunca ha hecho daño un jesuita á un hombre racional. Y si los jesuitas emplean medios reprobables para conseguir sus intentos, ¿no hay leyes ni autoridades para oponerse á ellos? ¿No confiesa un Estado y proclama su propia incapacidad al decir que no puede defenderse contra los jesuitas mas que suprimiéndolos?...»

Esto lo escribe, como hemos dicho, un periódico radical y anti-católico. Traslado á los periódicos de España y al señor ministro de Gracia y Justicia, comprendidos todos en la denominacion de liberales vulgares.

Segun los periódicos de Málaga dando todos los dias noticias de los crímenes que se cometen en aquella ciudad. Hace poco un joven hizo armas contra su padre, y detenido por un alcalde armó un escándalo. Las heridas por riña son muy frecuentes. El Avisador Malagueño dice que en los dias 5 y 6 habian sido llevados á la cárcel doce hombres.

Vemos en un periódico de Sevilla una protesta del Sr. Aristegui, Presidente que fué de la junta revolucionaria de aquella ciudad, contra el señor Romero Ortiz, por no aceptar los nombramientos que hizo la Junta. Dice el Sr. Aristegui que la conducta del señor ministro ofende á su dignidad y á la soberania que el pueblo dió á la Junta de Sevilla.

Dice un periódico de Valencia:
«Existen nuestra capital varias personas de arraigo y caracterizadas, que desean proponer la idea de desempeñar gratuitamente los más importantes empleos en nuestras oficinas de Hacienda en todos sus ramos, proporcionando con tan patriótica conducta una economía considerable al Tesoro, y desembarazando la marcha del gobierno provisional, que tendria menos número de ambiciones que satisfacer desde el momento que el ejemplo sellara los labios á los pedigueros.»

No sucede lo mismo por Madrid.

BOLSA DE HOY.

Titulos del 3 por 100 consolidado, publicado, 4-00, 34-05, 10; consolidado fin cor. fr. 34-25.
« Titulos del 3 por 100 consolidado exterior, publicado, 35-80.
Idem del 3 por 100 diferido, publicado, 33-50, 55 y 50.
Deuda del personal, 26 00 d.

De varios periódicos tomamos las noticias siguientes:

El gobernador de Fernando Pó participa, con fecha 29 de Septiembre último, que no ocurre novedad en aquella colonia, y que el estado sanitario de la misma es satisfactorio.

El diario oficial trae el siguiente aviso de la administración del Correo central:

«La Dirección general de correos ha dispuesto que las cartas o impresos para el archipiélago filipino y puntos intermedios del Mediterráneo, Océano Indico y mar de la China, que deban enviarse a su destino por la vía de Gibraltar en los meses de Noviembre y Diciembre de este año, se espidan por esta central en los días 15 y 29 del presente mes, y 13 y 27 del próximo.

«Lo que se anuncia al público para su conocimiento y efectos consiguientes.

Madrid, 7 de Noviembre de 1868.—El administrador, Juan Moratilla.»

Un periódico dice lo siguiente:

«Las casas de juego continúan siendo el escándalo de todas las personas honradas. Es de inmediata necesidad la adopción de medidas que corten este abuso, ejercido con el cinismo más punible a la sombra de una mal entendida libertad.

—De Murcia nos dicen el 8 lo que sigue:

«Pasan en esta capital cosas tan peregrinas como los repeticiones de los periódicos, que bien pudieran llenarse todas las columnas de un periódico, si se hubieran de referir.

«Es tal la coacción y el miedo que aquí infunden, que a pesar de estar nombrado por el Gobierno provisional el secretario de este gobierno civil, no vemos que se presente en su puesto, temiendo, sin duda, los fueros del nombrado por la junta revolucionaria, y teniendo tal vez en cuenta lo supeditada que está la autoridad civil a la influencia republicana.

«Tampoco se le ha dado posesión al verdadero y legítimo director de esta escuela normal, suponiendo que por no atreverse el gobernador a dejar cesante al nombrado por la junta.»

—El *Imparcial* manifiesta saber por conducto seguro que el ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de ministros, ha puesto un parte telegráfico al capitán general de la isla de Cuba, autorizándole a indultar a los sentenciados a muerte por delitos políticos, sin otra limitación que el prestigio de la autoridad y el orden público.

—En la noche del 6 unos mal intencionados pegaron fuego a las puertas de la casa del Cura párroco de San Clemente del Llobregat. Cuando la población se apercibió de este atentado, acudió presurosa a apagar el fuego y a salvar la vida del Cura párroco, que es de todos muy querido.

—Han sido nombrados administradores de Hacienda pública:

«De Cáceres, D. Luciano Mateos; de Cádiz, don Atilano Valledor; de Málaga, D. Antonio López Domínguez; de Valencia, D. Agustín Genot; de Navarra, D. Ramón Peñasco; de Sevilla, D. Gabriel Sánchez de Alarcón; de Pontevedra, D. Nicolás Alonso; de Tarragona, D. José Montoya; de Teruel, D. Carlos López Longoria; y de Burgos D. Francisco Arquiza.

—Dice *La Epoca*:

«No es cierto, como han dicho varios periódicos, que los duques de Madrid hayan salido de París para Gratz, en Alemania. Por el contrario, el *Gallego* afirma que D. Carlos de Borbón ha mandado vender todo su mobiliario, carruajes y caballos en aquella residencia, proponiendo esta bicerse en la capital de Francia.»

—En las noticias de España publicadas por *La Liberté* se da por abandonada la candidatura del duque de Montpensier, y hasta se fija la época en que esto ha sucedido, añadiendo que el duque había rechazado las proposiciones que se le habían dirigido.

—El Sr. D. Antonio Campos, que pasa al gobierno militar de Matanzas, ha sido ascendido a brigadier.

—Se ha concedido el retiro al coronel de estado mayor D. Federico Fernández San Roman.

—Ha sido declarado cesante D. Esteban de la Malla, juez de primera instancia del distrito de Buenavista de esta capital, y nombrado en su lugar D. Fernando Fernández de Rodas.

—Pide un periódico que desaparezca el impuesto con que se grava a las herencias que los hijos reciben de sus padres.

—La comisión de los Estados Unidos, cuya llegada está próxima, tiene por único objeto el influir cerca del Gobierno para que se rebajen los derechos de importación que los artículos de aquella República y especialmente las harinas pagan en la isla de Cuba.

—Dicen las cartas de París que a solicitud de los emperadores, ha tenido una conferencia con ellos el marqués de Miraflores.

—Ha sido nombrado para la secretaría de las Ordenes el Sr. D. Felipe Mendez Vigo.

—El señor D. José Agüera ha sido nombrado primer secretario de la legación de España en Lisboa.

—Los tesoreros de Hacienda pública declarados cesantes son los señores D. Carlos Taboada, de la Coruña; D. José de Chinchilla, de Pontevedra; don Diego González, de Segovia; D. Alfonso de la Torre, de Sevilla; D. Anselmo Izquierdo, de Soria; D. Vicente Jaumandreu, de Tarragona; y D. Emilio Salazar, de Canarias.

—La manifestación pacífica del domingo respecto de la libertad de cultos, se hizo extensiva a otras materias, puesto que los comisionados que subieron a conferenciar con el presidente del Consejo de ministros, hablaron de la abolición de matrículas de mar, reforma del ejército y de la Guardia civil y de otros varios asuntos.

El duque de la Torre hizo algunas observaciones respecto a la dificultad de acceder a algunas de las pretensiones, y sobre todo, acerca de la conveniencia de dejar su resolución a las Constituyentes.

—Han sido declarados cesantes los promotores fiscales: D. Nicolás de Leiba del juzgado de Molina de Aragón; D. Roque Barredo del de Avila; D. Julian Molinero del de Piedrahita; D. Manuel Orbanheas del de Arenas de San Pedro, y D. Crispulo Martínez Pozo del de Cebreros.

—Han sido nombrados promotores fiscales: de Arenas de San Pedro D. Francisco Martín; de Cebreros, D. Angel Velasco; de Molina de Aragón, D. Julian Martínez; de Piedrahita D. Felipe Moreno; de Avila D. Celestino Sastre y Serrano.

—Ha sido declarado cesante D. Ulpiano Gregorio de Arias, juez de primera instancia de Avila.

—El *Gaulois* da cuenta de haber circulado por París la absurda noticia de haber llegado a aquella capital un comisionado del Gobierno provisional español para ponerse de acuerdo con un plenipotenciario americano sobre la cesión de Cuba a los Estados Unidos.

—Parece que el empréstito no se contratará con nadie exclusivamente. Podrán algunas casas de banca respetables suscribirse por mayor ó menor cantidad, pero se llevará a cabo la suscripción y podrán contribuir a él todas las personas que quieran dar esta muestra de patriotismo.

—La misión diplomática que al decir de los periódicos franceses trae a Madrid el general venezolano Rojas, creemos que es relativa a nuestras cuestiones con las repúblicas de Chile y del Perú.

—Parece ya indudable el nombramiento del señor Alarcón para representar a España en Bélgica.

—El Sr. Cevallos ha dirigido una carta al *Gaulois*, que publica dicho periódico, en la cual dice que no es cierto haya escrito a los carlistas anunciándoles que el Emperador Napoleón apoyaría directa ó indirectamente su causa, y asegurando que está al servicio del llamado duque de Madrid, a quien ha dedicado su corazón y su vida.

—Han sido nombrados tesoreros de Hacienda pública:

De Alava, D. Carlos Mozá.—De Albacete, D. José Antonio Crisoli.—De Alicante, D. Francisco de Paula Duzmet.—De Almería, D. Francisco Lanu-

za.—De Avila, D. José Capmani.—De Badajoz, don Pedro González.—De Burgos, D. Simon Perez San Millan.—De Cáceres, D. Antonio Iribarre.—De Cádiz, D. Mariano García Ochoa.—De Castellón, don José Romo y Bedoya.—De Ciudad-Real, D. Juan del Nido.—De Córdoba, D. Juan de Dios Carrion.—De la Coruña, D. Pedro Calvo.—De Cuenca, don José Ilurria.—De Gerona, D. Ramon de Ortega.—De Granada, D. Juan Jurado.—De Guadalajara, D. Antonio Hector.—De Huelva, D. Francisco Cañero.—De Huesca, D. Manuel Villanova.—De Jaen, D. Juan Talero.—De Leon, D. Francisco Alonso Buron.—De Lérida, D. Gerónimo Miguel Jimenez.—De Logroño, D. Luciano Armas.—De Lugo, don Ricardo Cisneros.—De Málaga, D. Juan María Tomé.—De Murcia, D. Manuel Villante.—De Navarra, D. Esteban Galviano.—De Oviedo, D. Nicolás Ochoa.—De Palencia, D. Tomás Bueno.—De Pontevedra, D. Manuel Ruiz de Arana.—De Salamanca, D. Juan N. Piedrahita.—De Santander, D. Andrés Sanchez Martín.—De Segovia, D. Manuel Entero.—De Sevilla, D. Manuel Espejo.—De Soria, D. Gerónimo García Cabrero.—De Tarragona, D. Manuel Heredia.—De Teruel, D. Marcelino Salvador.—De Toledo, D. Francisco Javier Aguilera.—De Valladolid, D. Serafin Parody.—De Zaragoza, D. Rafael Fiol y Pons.—De las Baleares, don Luis Martínez de Huervás.—De Canarias, D. Pedro Vergara del Castillo.—De Guipúzcoa, D. Julian Elias.—De Vizcaya, D. Enrique de Saracho.—Y de Valencia, D. Miguel Jordan.

Los siguientes sueltos son de *El Imparcial*:

«Algunas personas se han dirigido a las administraciones de loterías, devolviendo los billetes de la Peninsular, toda vez que son ya dos los aplazamientos que ha sufrido, pero se les ha contestado que no hay autorización para reintegrar su valor.

Habiéndose faltado a las condiciones expresadas en los billetes, nos parece que no hay justicia en negar a los particulares la devolución de un dinero que solo desembolsaron en la persuasión de que la rifa, se efectuaría el 17 de octubre. Bueno fuese que se hiciera una declaración sobre este punto.»

—La provision de los cargos diplomáticos segun noticias de buen origen, aparecerá en la *Gaceta* antes de terminar esta semana.

—En los círculos oficiales se asegura que serán reemplazados los gobernadores de ocho provincias y los secretarios de algunas mas.

—En la noche del 21 de octubre último fué robada la iglesia de Castil de Vela (Burgos), llevándose los autores de este criminal atentado todos los vasos sagrados y efectos para el servicio de altares de algun valor.

Hasta la fecha no han sido habidos los que han llevado a cabo este acto de vandalismo; pero las activas diligencias que para su captura están practicando las autoridades dejan esperar que en breve caerán en su poder.

Ha continuado en el circo de Price la elección del comité democrático, habiendo ascendido el número de votantes a unos diez mil.

PARTE EXTRANJERA.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

París, 8 (a las cuatro y quince minutos de la tarde).

El periódico *Le Pays* comenta largamente la circular del general Prim prohibiendo a los militares el asistir a reuniones políticas públicas. El artículo es bastante hostil al general.

El periódico *L'Epoque* dice que María Cristina asistió a la llegada de doña Isabel de Borbón en París.

Berlin, 8. Los periódicos ministeriales dicen que, siendo verdadera la existencia del tratado concluido entre Francia y los Países-Bajos, el Gobierno y la Confederación del Norte tienen la obligación de tomar sus precauciones, y de activar la alianza con los Estados del Sud de Alemania.

Añaden que, a pesar de las aseveraciones de M. de Beust, será imposible, antes de dos años, que Austria pueda presentar un ejército de más de doscientos mil hombres.

Londres, 7 (recibido el 9 por la noche). El periódico *Army and navy Gazette* anuncia que la comisión de artillería de Woolwick ha adoptado para el ejército inglés el fusil culata Martini combinado con el cañon Henry.

Los diarios *Espectador* y *Telegraph* publican la misma noticia.

París 8 (por la tarde). El diario *L'Avenir National* y otros periódicos han sido secuestrados a causa de la suscripción Baudin.

New-York 8 (por el cable). Maculloch, ministro de Hacienda, ha emitido nuevamente 10 millones de dólares en certificados de empréstito 3 por 100: esta emisión es provisional para remediar la escasez de dinero.

París 7 (a las cinco de la tarde, recibido en la noche del 8 al 9). Un folleto titulado *Prim y el príncipe de Asturias* aconseja elegir al príncipe de Asturias bajo la regencia de Prim; el folleto hace grandes elogios de este general, y dice que es el solo hombre que puede marchar acorde con Castelar, Pezuela y Sartorius, formando así una reunión que sustraiga a la España de influencias exteriores.

El diario *El Gaulois* espera que Prim desaprobare las ideas emitidas en el folleto.

NOTICIAS GENERALES.

Anteanoche a las once ha muerto en esta capital el teniente general Garrido, ministro que fué del tribunal de Guerra y Marina.

Anteanoche se cometió un robo en la calle del Correo, núm. 4, agencia, por valor de unos 5000 rs., entre dinero y varios efectos. Los ladrones debieron abrir la puerta con ganza, puesto que en ella no se notaba la menor violencia, y después de cometer el hecho dejaron abierta la puerta principal. El juzgado correspondiente entiende ya en el asunto, pero hasta ahora no se sabe quienes sean los autores.

Ha sido nombrado para desempeñar la cátedra de instituciones canónicas, el Sr. D. Felipe Mas y Monzó, oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, y para la cátedra de economía política el auxiliar del mismo ministerio Sr. D. Gumersindo Ascarate.

El gobierno provisional ha indultado de la última pena, conmutándosela por la inmediata de cadena perpetua a los reos Pedro Díaz y Leandro Infante, autores del robo y doble homicidio perpetrado en la casa y personas de doña Casilda Ruiz y doña Cristina Paz, vecinas de la ciudad de Burgos. El fallo se pronunció por aquella audiencia anteayer.

PARTE RELIGIOSA.

SANTO DE MAÑANA. San Martín, obispo.

CULTOS.

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la iglesia de San Martín, donde por la mañana habrá misa mayor y sermon y por la tarde completas y procesion de reserva.

Continúa la novena de Nuestra Señora del Consuelo en San Luis, y predicará en los ejercicios de la tarde D. Isidro de la Fuente y Almazán. Sigue celebrándose por la noche los sufragios por las Almas del purgatorio en San Ignacio y en el Carmen Calzado.

VISITA DE LA CORTE DE MARIA.—Nuestra Señora de los Milagros en las Descalzas Reales, la de Belen en San Juan de Dios, ó la de Fuencisla en Santiago.

Se reza de San Martín, ob. y conf., con rito doble y color blanco.

MERCADO DE MADRID.

PRECIOS DE ARTÍCULOS AL POR MAYOR Y MENOR.

Carne de vaca, de 0,168 a 0,212 milésimas libra. Idem de cerdo, de 0,168 a 0,212 milésimas libra. Idem de ternera, de 0,400 a 0,500 id. id. Tocino añejo, de 9,600 a 10,400 escudos arroba, y de 0,400 a 0,424 milésimas libra. Idem fresco, de 0,330 a 0,354 milésimas libra.

Idem en canal, de 6,600 a 7,500 escudos arroba. Lomo, de 0,400 a 0,500 milésimas libra. Jamon, de 0,500 a 0,600 milésimas libra. Aceite, de 7,600 a 7,800 escudos arroba, y de 0,236 a 0,260 milésimas libra. Vino, de 2,600 a 3,300 escudos arroba; y de 0,072 a 0,118 milésimas cuartillo. Pan de dos libras, de 0,194 a 0,224 milésimas libra.

Garbanzos, de 3,600 a 6,400 escudos arroba, y de 0,168 a 0,248 milésimas libra. Judías, de 3 a 3,400 escudos arroba; y de 0,118 a 0,160 milésimas libra.

Arroz, de 3 a 3,400 escudos arroba; y de 0,118 a 0,160 milésimas libra.

Lentejas, de 0,600 a 2,200 escudos arroba; y de 0,096 a 0,118 milésimas libra.

Carbon, de 0,600 a 0,700 milésimas arroba.

Jabon, de 5,800 a 6,200 escudos arroba; y de 0,236 a 0,260 milésimas libra.

Patatas, de 0,600 a 0,700 milésimas arroba; y de 0,024 a 0,036 milésimas libra.

PRECIOS DE GRANOS EN EL DIA DE HOY

Cebada añeja, de 3,300 a 3,750 escudos fanega. Trigo vendido..... 4,409 fanegas.

Precio medio..... 7,402 escudos

Madrid 9 de Noviembre de 1868.—El alcalde primero, Nicolás María Rivero.

REAL OBSERVATORIO DE MADRID.

Observaciones meteorológicas del día 9 de Noviembre de 1868.

HORAS.	Barómetro reducido a 0° en milímetros.	TEMPERATURA EN GRADOS.		Dirección del viento.	ESTADO del cielo.
		Ream.	Centig.		
6 m.	708,21	0,2	0,2	O.	Cast. cub.
9 m.	708,85	1,6	2,0	N.	Cub. nb.
12 d.	707,62	7,5	9,4	O. S. O.	Nubes.
3 p.	706,22	8,2	10,3	O.	Idem.
6 p.	706,14	5,0	6,2	O. N. O.	Despej.
9 n.	706,41	3,3	4,1	O. N. O.	Idem.

Temperatura máxima del día... 8,0 11,3
Temperatura máxima al sol... 16,7 20,9
Temperatura mínima del día... 0,8 1,0

Evaporación en las 24 horas... 1,4 milímetros.

Lluvia en id. id..... 0

BOLSA DE MADRID.

Cotización oficial del 9 de Noviembre de 1868.

FONDOS PÚBLICOS.

Títulos del 3 por 100 consolidado, publicado 34-05 y 34-00; 35-00, 34-40 y 80 pequeños; a plazo, 34-20, 5, 30, 20, 25, 20, 15 y 10 fin cor. fir.

Títulos del 3 por 100 consolidado exterior, publicado, 35-75; a plazo 32-70 fin cor. fir.

Títulos del 3 por 100 diferido, publicado, 32-75; y 55.

Deuda del personal, no publicado, 26-00 p.

Billetes hipotecarios del Banco de España, publicado, 98-30.

Idem id. de la segunda serie, id., 90-45 y 90-00.

Acciones del Canal de Isabel II, de 1.000 rs., 8 por 100 anual, no publicado, par.

Obligaciones generales por ferrocarriles, de 2.000 rs., publicado, 65-00; no publicado, 54-90 p.

Idem id. nuevas de 2.000 rs., publicado, 64-00.

Idem id. de 20.000 rs., no publicado, 64-00 p.

Acciones del Banco de España, id., 125-00 p.

Idem de la Sociedad española de Crédito Comercial, id., 81-00 d.

CAMBIOS.

Londres a 90 días fecha 48-80 p.

París a 8 días vista, 5-09 p.

Imprenta de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL, Pelayo 34, a cargo de R. Lavajos y Arenas.

SILIO MARCIO,

EPISODIO

DE LOS PRIMEROS SIGLOS DEL CRISTIANISMO,

POR

D. MANUEL TROYANO Y RISCOS.

Esta preciosa novela de 165 páginas, escrita expresamente para EL PENSAMIENTO ESPAÑOL y publicada con aceptación general en nuestro folletín, se vende en Madrid a CUATRO reales vellón, y para provincias franca de porte a CINCO.

El autor cede el producto líquido de esta novela, después de cubierto el coste de impresión, a favor de Nuestro Santísimo Padre Pio IX para los gastos que le ocasione la celebración del próximo Concilio general.

Los pedidos se harán a la Administración de EL PENSAMIENTO, acompañando el importe, sin cuyo requisito no se servirán.

LA PREDICACION POPULAR,

POR MR. DUPANLOUP,

OBISPO DE ORLEANS.

TRADUCIDA POR D. L. R.

BAJO LA DIRECCION

DEL DR. D. BENITO SANZ Y FORÉS,

PREDICADOR DE S. M. y Abreviador de la Nunciatura Apostólica.

Esta obra interesantísima, no solo para Predicadores, sino también para los que ejercen la cura de almas, se vende elegantemente encuadernada en rústica y con un magnífico retrato de su ilustre autor, a 40 rs., en casa de R. Lavajos, calle de la Cabeza, núm. 27, a quien pueden dirigirse los pedidos, acompañando libranzas del giro mútuo del Tesoro ó sellos de franqueo.

EL MISTERIO

Y LA CIENCIA.

CONFERENCIAS DEL P. Félix en 1865. Véndese este folleto de 156 páginas a 4 reales en Madrid y 5 en provincias, en la administración de *El Pensamiento Español*, Pelayo y 50.

REVISTA

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

EDICION SEMANAL.

Se publica todos los sábados y consta de 16 páginas casi en folio a dos columnas.

Contiene: Parte doctrinal, Documentos notables y la Parte oficial de la *Gaceta* de la semana, variedades y noticias.

Al cabo de un año forma un tomo de 832 páginas. Cada número lleva un índice, cada tomo un índice general.

Se suscribe en Madrid a 3 rs. al mes: en provincias, a los mismos 3 rs. pagando en la administración de EL PENSAMIENTO, calle de Pelayo, 38 y 40, ó remitiendo a la misma el importe en libranzas ó sellos de correos sin descuento.

Hay números para servir suscripciones, desde 1.º del año actual, que formarán un tomo completo.

Recomendamos esta *Revista* a los que quieran conservar la colección de los artículos más notables de EL PENSAMIENTO y tener al propio tiempo la historia razonada de los sucesos contemporáneos.

Las conferencias de 1867 forman un abultado folleto de 474 páginas y cuestan 4 rs. en Madrid y 5 en provincias.

oLpedidosministrador de *El Pensamiento Español*, Pelayo, 38 y 40.

PRONUNCIADAS EN LA CATEDRAL DE PARIS POR EL R. PADRE FELIX EN 1867

Indice de materias.—Conferencia I: Objeto y naturaleza del arte.—II: Objeto de arte y vocación del artista.—III: El hombre y el artista.—IV: Causas de la decadencia artística.—V: El realismo en el arte; y VI: El arte y el cristianismo.

Las conferencias de 1867 forman un abultado folleto de 474 páginas y cuestan 4 rs. en Madrid y 5 en provincias.

oLpedidosministrador de *El Pensamiento Español*, Pelayo, 38 y 40.

PRONUNCIADAS EN LA CATEDRAL DE PARIS POR EL R. PADRE FELIX EN 1868

Materias de que tratan.—Conferencias I y II.—Decadencia por el ateísmo: El ateísmo ante el progreso.—III: Lo que debe ser la religión para realizar el progreso.—IV: Las religiones no cristianas ante el progreso.—V: Las religiones protestantes ante el progreso.—VI: Las religiones cristianas cismáticas ante el progreso.

Las conferencias de 1868 forman un folleto de 471 páginas y está de venta a 4 rs en Madrid y 5 en provincias, en la administración de *El Pensamiento Español*, calle de Pelayo, núm. 38 y 40, Madrid.

PRONUNCIADAS EN LA CATEDRAL DE PARIS POR EL R. PADRE FELIX EN 1866

CONFERENCIAS DEL P. Félix en 1866. Un folleto de 156 páginas. Puede comprarse a 4 rs. en Madrid y 5 en provincias, en la administración de *El Pensamiento Español*, Pelayo, 38 y 40.

PRONUNCIADAS EN LA CATEDRAL DE PARIS POR EL R. PADRE FELIX EN 1865

CONFERENCIAS DEL P. Félix en 1865. Véndese este folleto de 156 páginas a 4 reales en Madrid y 5 en provincias, en la administración de *El Pensamiento Español*, Pelayo, 38 y 40.

Ayuntamiento de Madrid